

## SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



MEXICO

## DEPARTAMENTO DE ARCHIVO

PRIMERA OFICINA DE TRAMITE

1967

Núm. 728

Año de iniciación

Toca al Amparo en Revisión

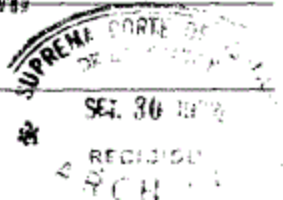
Promovido por Oscar Hernández A. y C. g. s.

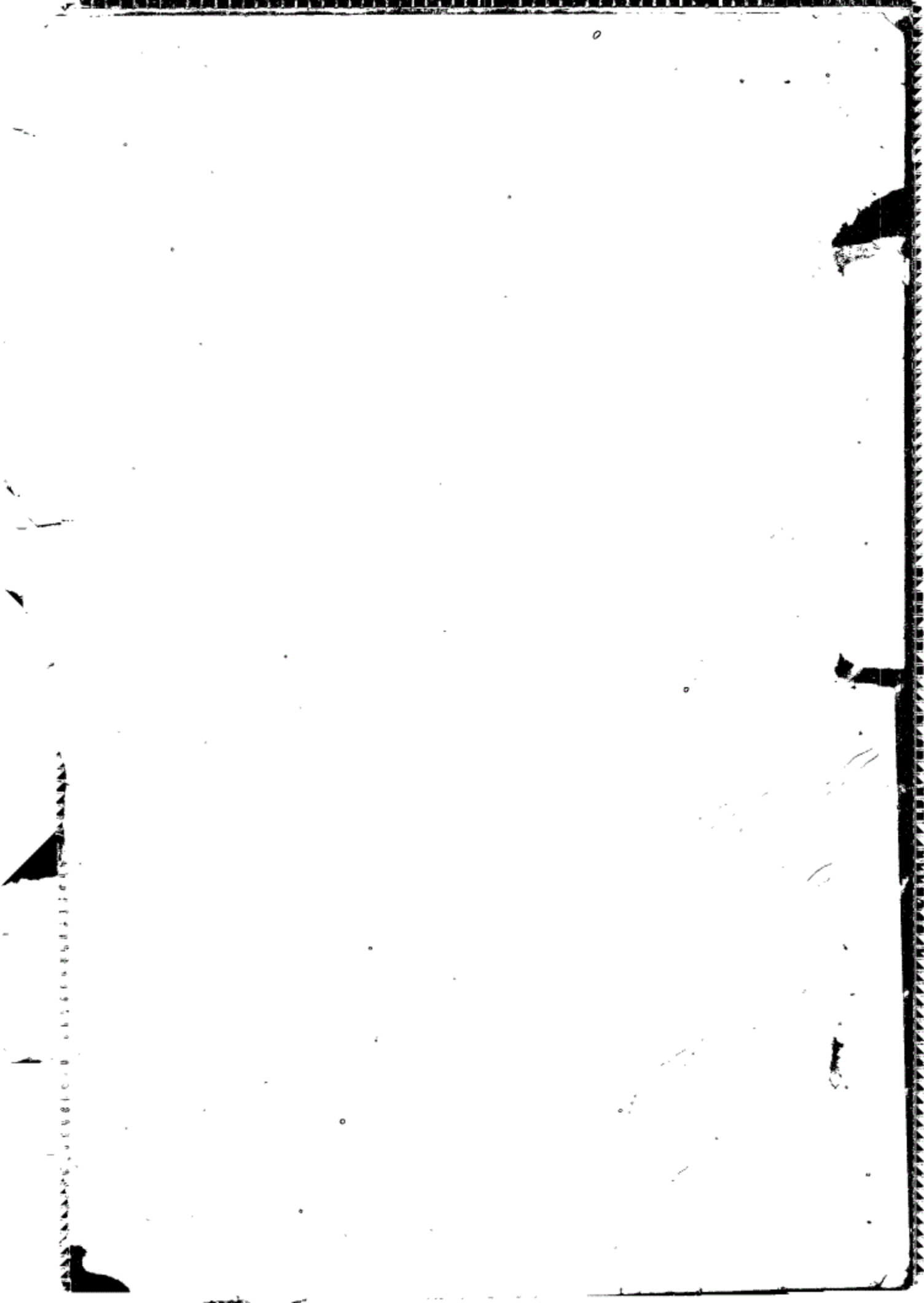
Contra actos de Congreso del D. F. y Chih. y otros actos.

Ante el Juez de Distrito de

1º CHIHUAHUA

Fecha de ingreso al Archivo





FALLADO

Aut: Sr. Oscar Hernández Saenz

ADMINISTRATIVO

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



ACTUARIO

2 / CUADERNOS.

MINISTERIO PÚBLICO

MEXICO

19 67.

PRINCIPAL

NUM. 7285./67

IA. OFICINA DE TRAMITE

AMPARO EN REVISION

Quejoso: OSCAR HERNANDEZ A. Y COAGRAVIADOS.

Promueve en su nombre

Por violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución

Federal contra actos de 1 Congreso del Estado de Chihuahua.

Juzgado de Distrito de EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Fecha de interposición 5 de agosto de 1967

74 ABR. 1972

La suspensión del acto fué

Fecha de la sentencia del inferior 15 de agosto de 1967

" en que se recibieran los autos 11 de septiembre de 1967.

" de la ejecutoria de la Corte

Acto reclamado Por la expedición del decreto 293 que establece un impuesto adicional sobre todos los impuestos ordinarios cuyo rendimiento será destinado al sostenimiento de la Universidad del Edo. de Chihuahua.

El Juez resolvió SOBRESERVIENDO Y NEGANDO EL AMPARO.

La Corte falló

Fecha en que se devolvieron los autos

26 SET 1967

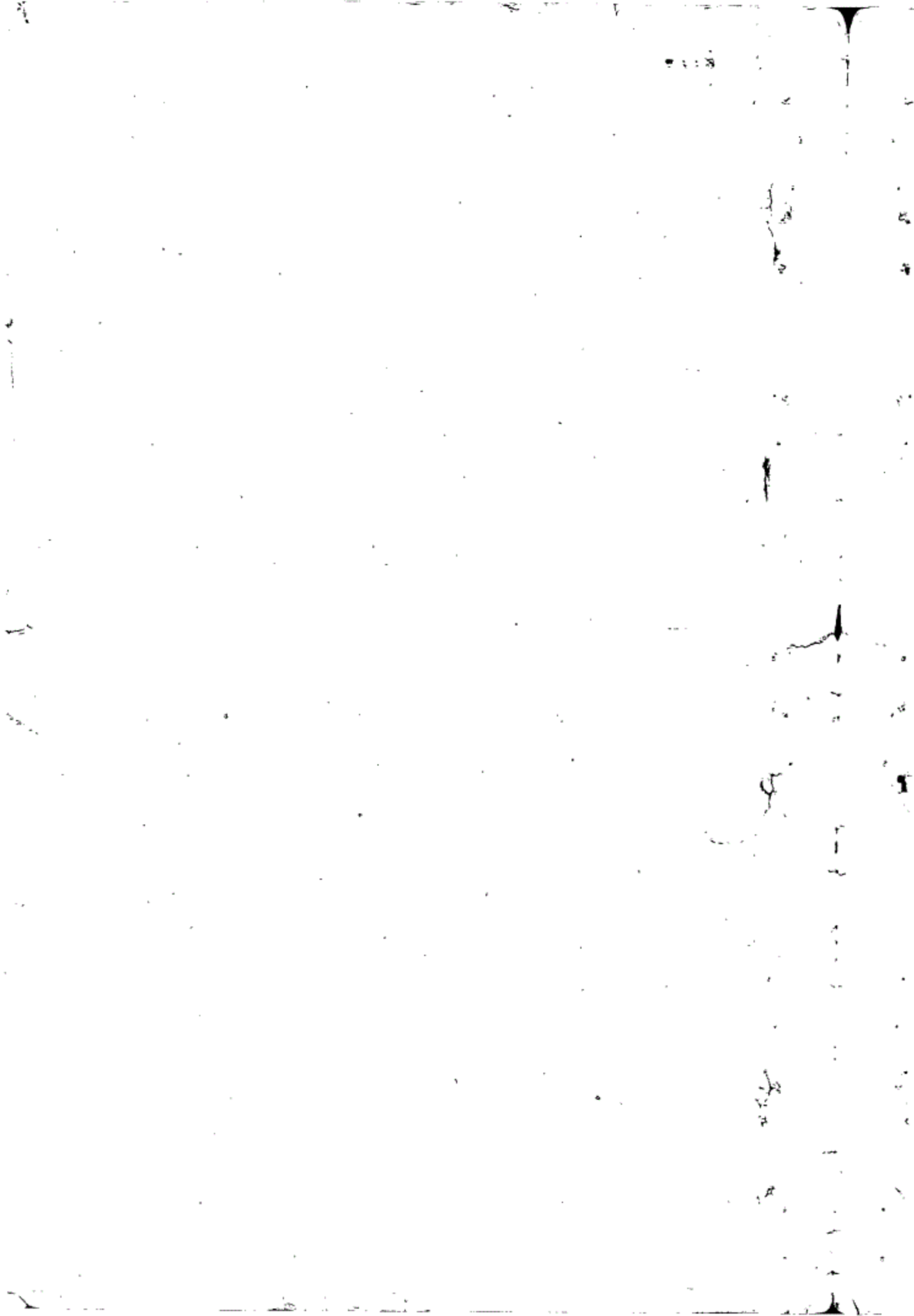
Tramite de

Actuario.

el Sr.

ADMINISTRATIVO







PODER JUDICIAL DE LA  
FEDERACION

# AVISO DE INICIACION

Núm. ....

Hoy ha sido admitida la demanda de amparo que ... **OSCAR HER-**...

**NANDEZ A. y coagraviados,**...



SECCION SEGUNDA

AMPAROS

NUM. 5692

promovió ante este juzgado contra actos de **l. H. Congreso del Estado,**  
**CC. Gobernador del Estado, Tesorero General y Recau-**  
**dador de Rentas del Estado.**...

que considera violatorios de los artículos **14 y 16** ... de la Constitución Gene-  
ral de la República; quedando registrado en el juicio respectivo bajo el número...  
**233/67**

Lo que tengo la honra de comunicar a usted en cumplimiento de lo preve-  
nido por el artículo 148 de la Ley de Amparo Vigente, suplicándole se sirva dar  
cuenta a esa Superioridad.

Protesto a usted mi atenta consideración.

**Chihuahua, Chih., 5** ... de **Agosto** ... de **1967**...

**EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL EDO.**

**LIC. ERNESTO DIAZ INFANTE.**

00070076

Al C/ ☒ Secretario General de Acuerdos de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación. **México D. F.**  
Al C. Secretario de Acuerdos del H. Tribunal Colegiado del **3er.** ... Circuito. **Saltillo, Coah.**

SUB. DE LA  
DE JUN. DE LA

Ago 9 11 49 AM '67

DE LA  
DE LA  
DE LA



POD. JUDICIAL DE LA  
FEDERACION



SECCION SEGUNDA

AMPAROS

NUM. 6522

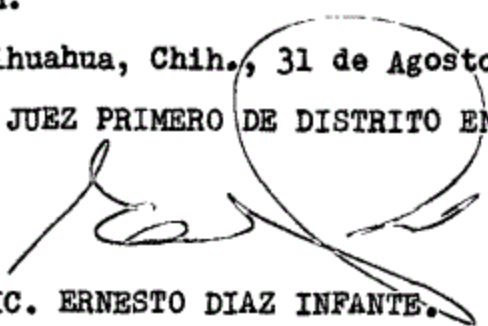
7285/67  
12  
7215

C. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA  
H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.  
MEXICO D. F.

En grado de revisión estoy remitiendo a esa Superioridad, los autos originales del Juicio de amparo 233/67 promovido por Oscar Hernandez A. y coagraviados contra actos del H. Congreso del Estado y otras autoridades por violación de los artículos 14 y 16 Constitucionales y constante de ochenta y dos fojas útiles y tambien en dos fojas útiles el escrito de expresión de agravios.

Reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

Chihuahua, Chih., 31 de Agosto de 1967.  
EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL EDO.

  
LIC. ERNESTO DIAZ INFANTE.



SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA DE LA  
NACION

SEP 8 11 01 AM '67

OFICINA DE  
CERTIFICACION  
JUDICIAL Y  
CORRESPONDENCIA

Recibido por correo con los anexos  
que se citan.

*E. Martínez*

*E. Martínez*



3

H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

México, D. F.

JOSE OSCAR FIERRO SAINZ

representante común de los quejosos

carácter que tengo acreditado en el juicio de amparo señalado al rubro, con fundamento en el inciso a) de la fracción I del Artículo 84 de la Ley de Amparo, ante esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, vengo a interponer el recurso de revisión, contra la sentencia dictada por el C. Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en el juicio de amparo señalado al rubro, promovido contra actos del Congreso Local de Chihuahua, C. Gobernador y Tesorero General del mismo Estado, y del C. Recaudador de Rentas de esta Ciudad GUERRERO? Chih.

La sentencia recurrida fué pronunciada el día 15 del mes en curso, publicada en lista el día 16, surtiendo sus efectos el día 17 de este propio mes, y como se interpuso un día feriado que fué el día 20, me encuentro dentro del término legal para recurrir dicha sentencia.

En cumplimiento del Artículo 85 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política Mexicana, manifiesto que la sentencia contra la cual interpongo el recurso de revisión, causa a los quejosos los siguientes

Agravios:

1o.-El Juez "a quo", en el Cuarto Considerando de la sentencia recurrida, dice a la letra:

"Los anteriores conceptos de violación, son infundados. En efecto, el decreto impugnado adiciona los artículos 2106 y 2079 del Código Administrativo en el Estado, para quedar como sigue: "2106.-Los ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen normalmente para la atención del gasto público.-Con este mismo carácter se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos a que se refiere este Artículo, cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Artículo 2079.-A la Tesorería General del Estado ingresarán todos los caudales públicos pertenecientes al Estado, de acuerdo con lo establecido en este Código y su Reglamento. -Los ingresos que le corresponda percibir a la Universidad de Chihuahua, de conformidad con lo establecido por el Artículo 2106, serán recaudados por las Oficinas Receptoras, simultáneamente con el enteró de los impuestos ordinarios, cuyo rendimiento se concentrará directamente en la Tesorería General del Estado, quien lo entregará al Patronato de la Universidad de Chihuahua." De la simple lectura de los Artículos transcritos, se advierte que no es verdad lo que afirman los quejosos de que se establece un gravamen o retribución por la educación universitaria que imparte el Estado de Chihuahua, pues para poder coincidir con el evento que se menciona en los conceptos de violación, era necesario que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad a recibir la enseñanza o que gravara de cualquier forma la instrucción universitaria, lo que no sucede, sino que el decreto, al adicionar el Artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, establece un aumento del 4% en la tasa del los impuestos ordinarios, derechos y productos que percibe el Estado, para ser destinado al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Por lo que los preceptos impugnados no gravan la educación universitaria, sino que el impuesto recae sobre todos los contribuyentes por las distintas actividades que desarrollan ya calificadas por el Estado y únicamente adiciona los impuestos que anteriormente pagaban, con el 4% para destinarlo al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua; que es un gasto público, como lo requiere la Constitución en su artículo 31 Fracción IV, ya que es indudable que tiene ese carácter la educación universitaria a cargo del Estado, de conformidad con lo que ordena el Artículo 3o. de la Constitución Federal. El anterior criterio se basa en la Tesis Jurisprudencial número 28 publicada en las páginas 75 a 79 de la primera parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, editado en 1965. En estas condiciones el Decreto reclamado no es violatorio de los Artículos 3o. Fracción VII, 14 y 16 de la Constitución".



Las anteriores consideraciones del "a quo", son incongruentes y contradictorias puesto que, sin que aparezca del Decreto impugnado ni una sombra, siquiera, de que el 4% que grava TODOS LOS IMPUESTOS ORDINARIOS Y DERECHOS para destinarlo ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, sea un aumento de tasa, la sentencia recurrida así lo declara enfáticamente y afirma que ese aumento de tasa, como piadosamente lo denomina, no grava la instrucción universitaria, puesto que, para que tal cosa ocurriera, sería necesario que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad a recibir la instrucción universitaria. Este argumento nos llevaría a la conclusión de que en los colegios de paga, la instrucción resulta gratuita, debido a que, como los alumnos, por su natural dependencia económica, no hacen los pagos de sus colegiaturas, la instrucción que reciben no es a título onerosa.

Como queda demostrado, el impuesto impugnado ha sido creado con el exclusivo fin de sostener a la Universidad de Chihuahua, en su misión educadora, con detrimento de los causantes de dicho impuesto y en contravención del Artículo 30. Constitucional que establece categóricamente que la instrucción que imparta el Estado debe ser gratuita. Por tanto éste debe ajustarse a sostener a la Universidad en la forma y términos que la Ley de Egresos del Estado en su Partida 217 fracciones IV y V señala, que destina para la Universidad la suma de \$4.630.000.00, sin que dicha partida pueda modificarse, sino con cargo a los gastos públicos y de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria del Artículo 30. Constitucional. Tal disposición legal establece, entre otras condiciones, la capacidad del presupuesto y no faculta al Estado para fijar impuesto alguno para el sostenimiento específico de los centros educativos superiores; en consecuencia, el Juez a quo, al tomar en consideración lo establecido por el precepto Constitucional invocado, viola en agravio de los quejosos el principio de legalidad garantizado por los Artículos 14 y 16 Constitucionales.

II.-La sentencia recurrida establece que el segundo concepto de violación es infundado, pretendiendo que la expedición del Decreto impugnado fué expedido por el Congreso del Estado en uso de las facultades que le confieren los artículos 64 Fracciones I y VI y 162 de la Constitución Política del Estado. Tal apreciación es inexacta, porque si bien es cierto que la fracción I del Artículo 64 da facultades al Congreso para legislar en todo lo concerniente al régimen interior del Estado, expidiendo cuantas leyes y demás disposiciones sean necesarias para su Gobierno y administración, también es cierto que la fracción VI del mismo Artículo, sólo faculta al Congreso para fijar anualmente todas las bases para la administración pública del Estado, PREVIO EXAMEN DEL PRESUPUESTO que presente el Ejecutivo; el Artículo 162 invocado por el a quo, faculta al Congreso para expedir las disposiciones hacendarias que establezcan las contribuciones necesarias para los gastos públicos, en VISTA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, el cual no está facultado para modificar; además deberá sujetarse a lo establecido por el Artículo 163 que establece que el año fiscal del Estado y los Municipios se contará del 1.º de enero al 31 de diciembre de cada año. Por tanto las facultades del Congreso son limitadas, máxime cuando no fundó ni motivo el Decreto impugnado y establece un impuesto exclusivo, este es: privativo, prohibido por la Constitución Política del Estado, como se ha demostrado anteriormente al establecer las restricciones establecidas en el artículo 162 de la misma, por la Constitución Federal, como se comprueba plenamente con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia definida:

"De acuerdo con el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, para la validez constitucional de un impuesto, se requiere la satisfacción de tres requisitos fundamentales: primero, que sea proporcional; segundo, que sea equitativo, y tercero que se destine al pago de los gastos públicos. Si falta alguno de estos tres requisitos, necesariamente el impuesto será contrario a lo establecido por la Constitución, ya que ésta no concedió una facultad omnímoda para establecer las exacciones que, a juicio del Estado, fueran convenientes, sino una facultad limitada por esos tres requisitos"

Tomó LXV.- Arrigunaga Peón Manuel de Pag. 2723

" LXIX.- Caberut Alberto M. y Coags. " 398

" LXIX.- Caberut Alberto M. y Coags. " 5432

" LXXXIII.- Bolaños García Fulgencio. " 813

" LXXV.- Mora Manuel F. " 3603

(Copilación del Semanario Judicial de la Federación, T. LXX, Pág. 1000)

Por tanto, al dar interpretación indebida a las disposiciones constitucionales que se han citado y al no acatar la jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia, el Juez sentenciador falta a los más elementales principios de legalidad violándolos en nuestro agravio y en contravención de los Artículos 14 y 16 Constitucionales.

14  
III.-El Decreto impugnando de inconstitucionalidad, expresa con toda claridad y precisión: "Se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos....." No cabe, en consecuencia, ninguna interpretación gramatical ni lógica que no sea la que se expresa literalmente.

Mucho menos cabe la interpretación arbitraria que pretende darle el Juez "a quo", en el sentido de que se trata de un aumento de tasa sobre los impuestos. Por tanto el decreto viola los más elementales principios de tributación y jamás se ha dado el caso de que las erogaciones, como son los impuestos gravados, sean motivo de tributación.

Así pues, queda claro que el Decreto de que se trata, grava erogaciones y no percepciones, por lo que es a todas luces ilegal, injusto y monstruoso.

Por tanto viola los principios de justicia y legalidad consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, y el Juez, al no tomar en consideración las razones y fundamentos en que basamos nuestra demanda de amparo, viola en nuestro agravio dichas garantías constitucionales.

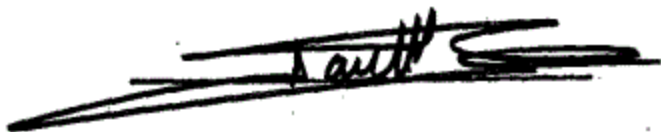
Por todo lo expuesto y fundado, a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, pedimos atentamente:

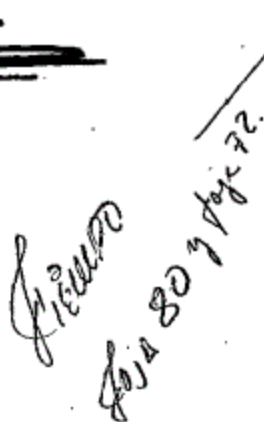
PRIMERO:-Tener por interpuesto en tiempo y forma el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de garantías.

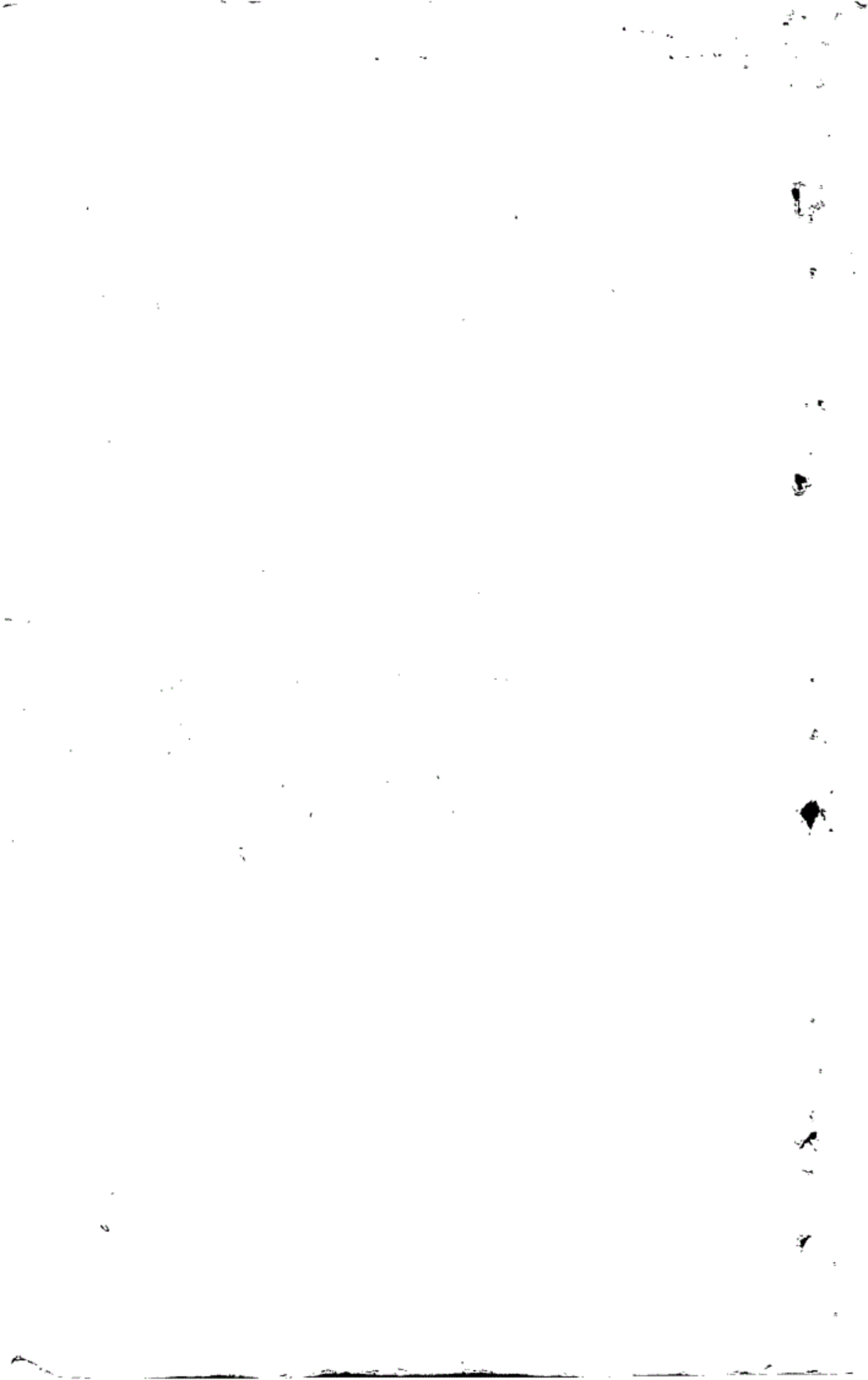
SEGUNDO:-Declarar operantes los agravios que se han dejado expuestos en este escrito, revocando la sentencia recurrida.

TERCERO:-Sentenciar declarando que la Justicia de la Unión nos ampara y protege contra los actos reclamados, emanados de las autoridades responsables.

Chihuahua, Chih., 22 de Agosto de 1967.  
Atentamente.



  
Folios 80 y 81 y 82.





SECCION PRIMERA

Toca 7285/67

FORMA A-54

México, Distrito Federal, a 20 veinte de septiembre de --  
1967 mil novecientos sesenta y siete.

Con el aviso de iniciación y el oficio de remisión ---  
de los autos, fórmese y regístrese el toca relativo al juicio  
de amparo promovido por Oscar Hernández A. y coagraviados - -  
contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y de otras-  
autoridades. Acúcese recibo. Visto el recurso de revisión que  
se hace valer en contra de la sentencia dictada en el juicio -  
de amparo a que este toca corresponde y teniendo en considera-  
ción que en el presente caso se debate el problema de la incons-  
titucionalidad de una ley, y además estando interpuesto en - -  
tiempo y forma dicho recurso, con fundamento en los artículos  
84, fracción I, inciso a), 86 y 90 de la Ley de Amparo, y 11,  
fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fe-  
deración, se acuerda:

I.- Se admite el recurso de revisión interpuesto por -  
la parte quejosa; pónganse los autos a la vista de las partes,  
por diez días, para que aleguen lo que a sus derechos convenga;  
transcurrido ese plazo, pase el asunto, por igual término, al -  
Ministerio Público para que formule pedimento; y, cumplido que-  
sea ese requisito, tórnense los autos al Pleno para su resolu-  
ción.

II.- Notifíquese.

Lo acordó y firma el ciudadano licenciado Agapito - -  
Pozo, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
Doy fe.

MPL/agf.

Se cumplió con lo mandado. Conste.



En 10 OCT. 1967 por lista de la misma  
fecha, se notificó la resolución anterior a los intere-  
sados y por oficio a las autoridades responsables según  
minuta, que se agrega.



En 10 OCT. 1967 Notificado el C. Procurador  
General de la República del auto que antecede,  
dijo que designa para intervenir en este negocio  
al C. Agente Licenciado Walter quien  
estando presente quedó enterado y firma.

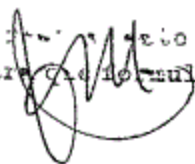
EL PRIMER SUB-PROCURADOR GENERAL DE  
LA REPUBLICA ENCARGADO DEL DESPACHO

  
LIC. JULIO SANCHEZ VARGAS



25 OCT. 1967  
El                      se recibe este expediente del C:  
Actuario y queda a la vista de las partes por diez  
días los que corren de 25 OCT. 1967 al 7 NOV. 1967  
del presente

- 8 NOV. 1967  
En                      se                      expediente  
al Ministerio Público, para                      pedimento  
Conste.





AL C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO  
CHIHUAHUA, CHIH.

PRIMERA  
09718

Toca 7285/67

Con el oficio de usted, número 6522 de -  
fecha 31 de agosto último, se recibieron en esta Corte --  
los anexos que al mismo se acompañan, relativos al juicio  
de amparo directo promovido por Oscar Hernández A. y Con-  
graviados, contra actos del Congreso del Estado.

Protesto a usted mi atenta consideración.

México. D. F. a 20 de septiembre de 1967

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDO,

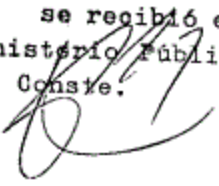
A.G.D

RAUL CUEVA PATTECON

M I N U T



El -6 NOV. 1967 se recibió este expediente del C.  
Agente del Ministerio Público, con el pedimento  
que se agrega. Conste.





Depto. de Actuarios

Amparo 7285/57. tosa.

Sala 2a.

Sección 1a.

Número 233/57. 811.

En el toca al juicio de amparo promovido por

donde interpuso el Sr. [illegible]

contra actos de unión y otras autoridades,

Jz. lo. de la Sala en  
el día de [illegible]

el C. Presidente de la Suprema Corte de Justicia, con fecha

20 de septiembre de 1957,

proveyó el acuerdo que sigue:

Se admite la revisión interpuesta, póngase los autos a la vista de las partes por diez días para que aleguen lo que a sus derechos convenga y transcurrido este plazo pase el asunto por igual término al Ministerio Público para que formule pedimento, y cumplido este requisito, tórnense los autos al Pleno de la Corte,  
para su resolución.

Lo que notifico a usted como lo previene la Ley, suplicándole se sirva acusarme recibo.

Protesto a usted mi atenta consideración.

México, D. F., a 10 de octubre de 1957.

Actuario,

18826 Al C. Jefe del Congreso del Dto.  
Zahuatepec, D.F.

18827 Al C. Gobernador Constitucional del Dto.  
Zahuatepec, D.F.

18828 Al C. Secretario del Dto.  
Zahuatepec, D.F.

18829 Al C. Secretario de Justicia.  
Madr. Guerrero, D.F.



P R I N C I P A L.



PROCURADURIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA

México, D.F., Noviembre 25 de 1967.

H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION  
P R E S E N T E .

00.97.

OSCAR HERNANDEZ A. Y COAGRAVIADOS, promovieron amparo por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales ante el C. Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua en contra del Congreso de esa Entidad Federativa, su Gobernador Constitucional, su Tesorero General y el recaudador de rentas de la Ciudad de Chihuahua, señalando como actos reclamados: la expedición del Decreto No. 293 publicado en el Periódico Oficial del Estado de 19 de Junio de 1967, estableciéndose un impuesto adicional sobre todos los impuestos ordinarios, derechos y productos a que se refiere el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua y cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua; la firma y promulgación de ese Decreto por parte del Gobernador de esa Entidad; el refrendo y actos de ejecución por parte del Tesorero General y el recaudador de rentas y los efectos y consecuencias derivados de esos actos.

El C. Juez del conocimiento, por sentencia de 15 de Agosto de 1967, sobreseyó el juicio de garantías promovido por los quejosos respecto al refrendo del Decreto No. 293 que reclamaron del C. Tesorero General del Estado y le negó el amparo de la Justicia de la Unión.

Los agraviados, por conducto de su representante común, por escrito de 22 de Agosto último interpusieron

revisión, argumentando que el a quo violó en su perjuicio el principio de legalidad garantizado por los artículos 14 y 16 Constitucionales y también los artículos 64 fracciones I y VI y 162 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

En opinión del suscrito, los agravios hechos valer son infundados, ya que la sentencia es legal y está debidamente motivada, porque es cierto, como lo dice el juzgador que los preceptos impugnados no gravan la educación universitaria, sino que el impuesto recae respecto de todos los contribuyentes por las diversas actividades que desarrollan y que han sido ya calificadas con anterioridad por el Estado, y únicamente adiciona los impuestos que con anterioridad pagaban, con el 4% para destinarlo al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, que es un gasto público estando en consonancia la fracción IV del artículo 31 de la Carta Fundamental de la República Mexicana, ya que la educación universitaria tiene ese carácter y está a cargo del Estado, siendo falso que las consideraciones del juzgador sean incongruentes y contradictorias y también que grave la instrucción universitaria, pues es cierto que para que tal cosa ocurriera, sería preciso que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad, aunque para el sostenimiento de ésta deban de contribuir obligatoriamente los causantes, y por eso esta argumentación es ineficaz e improcedente; y también es inoperante el segundo concepto de agravios hecho valer, ya que la Legislatura Local si está facultada legalmente para fijar los impuestos adicionales que juzgue convenientes, tal y como el presente, en su de las facultades que le confieren los artículos 64.

2.



PROCURADURIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA

fracciones I y VI de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y por último, también es infundado el último de los agravios hechos valer, y del que se solicita se revise, porque el del conocimiento aplicó debidamente la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el Decreto reclamado no viola los requisitos de proporcionalidad y equidad, ya que lisa y llanamente aumenta en un 4% los previamente establecidos, en la proporción y medida de los impuestos que tengan que cubrir, y por tanto siendo infundados los agravios hechos valer, procede que ese Máximo Tribunal confirme el fallo recurrido.

Por lo expuesto, se solicita de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sirva CONFIRMAR el fallo recurrido.

A T E N T A M E N T E .  
EL AGTE. DEL MIN. PUB. FED. AUX.

LIC. CARLOS MARTINEZ LUDERT.

20-100





PODER EJECUTIVO

Tesorería General

Núm. IMP. DIV.

# 8357.-

JUICIO DE AMPARO.

**MEMORANDUM**

Chihuahua, Chih., a 18 Noviembre de 1967.

C. JEFE DEPTO. ACTUARIOS  
DE LA SUP. CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION,  
MEXICO, D. F. -

7285/67

Por su atento oficio Núm. 18828 fechado el 10 de octubre último, quedo enterado del acuerdo dictado por el C. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fecha 20 de septiembre del año en curso, en el Juicio de Amparo Núm. 233/67, en revisión promovido por OSCAR HERNANDEZ A. Y COAGRAVIADOS.

A T E N T A M E N T E .  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.  
EL SUB-TESORERO DEL ESTADO.

HECTOR BOUCHEZ RIVERO.

SUPLENTE  
DE JUSTICIA DE LA

10629T

Nov 25 11 56 AM '67

RECEIVED  
CERTIFICADO  
DE RECEPCION  
DE LA  
SECRETARIA DE JUSTICIA

2 DEC. 1967

por acuerdo de la presidencia  
se agrega el presente documento a sus antecedentes  
para los efectos a que haya lugar. Comate.



GOBIERNO DEL ESTADO

I.G.E.

Forma 57

Dependencia  
DEPARTAMENTO DE GOBERNACION.  
Sección  
Núm. de Oficio 302-  
Expediente 216.2/181386. 28118

ASUNTO: -ACUSE DE RECIBO.

Chihuahua, Chih., Noviembre 17 de 1967.

H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.  
MEXICO, D. F. 7-12-67

Por acuerdo del C. Gobernador del Estado, me permito acusar recibo de su atento oficio número 18827, de 10 de octubre anterior, y que se relaciona con el -- Juicio de Amparo número 233/67, promovido por OSCAR HERNANDEZ A. y Coagraviados, contra actos del citado funcionario y de otras autoridades.

Reitero a esa H. Suprema Corte de Justicia -- de la Nación las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

105004

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

Nov 24 12 01 PM '67

OFICINA DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA

SUFRAGIO ELECTIVO: NO REELECCION.

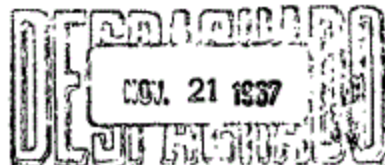
El Jefe del Departamento.

LIC. AUGUSTO MARTINEZ GIL.

COE.- 16742.

Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales  
"CHIHUAHUA RUTA HOSPITALARIA A LOS JUEGOS OLIMPICOS"

GOBIERNO DEL EDO. DE CHIHUAHUA



Oficina de Correspondencia y Archivo

Al contestar sírvase citar invariablemente el número del Oficio y del Expediente

28 NOV. 1967 por acuerdo de la presidencia  
se agrega el presente documento a sus antecedentes  
para los efectos a que haya lugar. Conste.



México, Distrito Federal, a

once de enero de mil novecientos -  
sesenta y ocho.

Pase este asunto para su estudio,

R. 7285/67.

al C. Ministro GUZMAN NEYRA ----- a quien le-

corresponde según el turno especial que para el--  
efecto se lleva en la Oficina General de Acuerdos.

Lo acordó y rubrica el P. Presiden

te. Doy fe.

emo.





I.G.E.

Forma C. y A.-1.

ACUSE DE RECIBO  
DE LA

OFICINA CENTRAL DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

No. de Registro I8742  
Su escrito número 233/67  
De fecha Oct. 10 de 1967  
Se turnó a GOBERNACION.  
Expediente 216.2/181386  
Chihuahua, Chih., a 16 de Nov. de 1967

ASUNTO:

AMPARO PROMOVIDO POR OSCAR  
HERNANDEZ A Y COAGRAVIADOS.

CORRESPONDENCIA  
ARCHIVO

Consignatario:

DEPARTAMENTO DE ACTUARIOS.  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.  
MEXICO, D. F.

El Jefe de la Oficina

PARA POSTERIOR INFORMACION, FAVOR DE CITAR EL NUMERO DE  
REGISTRO Y OFICINA A DONDE SE TURNO EL ASUNTO

jaao.

Chihuahua - Ruta Hospitalaria a los Juegos Olímpicos



CHIHUAHUA, CHIH.  
16 XI 67

PERM. 153  
GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA

114015

SUSPENSIONE CORTE  
DE JUSTICIA DE LA  
NACION



Nov 23 9 38 AM '67

OFICINA DE  
CERTIFICACION  
JUDICIAL Y  
CORRESPONDENCIA

Por acuerdo de la Presidencia  
se agrega a su expediente.  
México, D. F.

SECRETARÍA DE JUSTICIA  
MEXICO  
27. 38  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
Oficina de Acuerdos

M.A.R.B. 15692



CORREOS  
MEXICO  
=040

Presidencia



PODER LEGISLATIVO

Secretaría

NUM.

345.

I.G.E.

Forma No. 23-A

*a*

Chihuahua, Chih., Noviembre 17 de 1967.

C. PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA DE LA NACION.  
Dpto. de Actuarios.  
México, D. F.

Esta Cámara Legislativa en sesión de hoy, quedó enterada de su atento escrito de fecha 10 de Octubre ppdo., relativo al Juicio de Amparo Núm. -- 7285/67 toca., promovido por el C. Oscar Hernández A., y Coags., contra actos de este Alto Cuerpo y de otras Autoridades.

Reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO ; NO REELECCION.

DIPUTADO SECRETARIO

PROF. ROBERTO GONZALEZ LOYA

DIPUTADO SECRETARIO.

JULIO VILLEGAS CORDERO

'mfa.

RECEIVED  
DEPT. OF THE ARMY  
WASHINGTON, D.C.

Nov 28 10 33 AM '67

RECEIVED  
DEPT. OF THE ARMY  
WASHINGTON, D.C.

43

*E. Martinez*

- 3 ENE. 1968  
por acuerdo de la presidencia  
se agrega el presente documento a sus antecedentes  
para los efectos a que haya lugar. Comste.

*[Signature]*

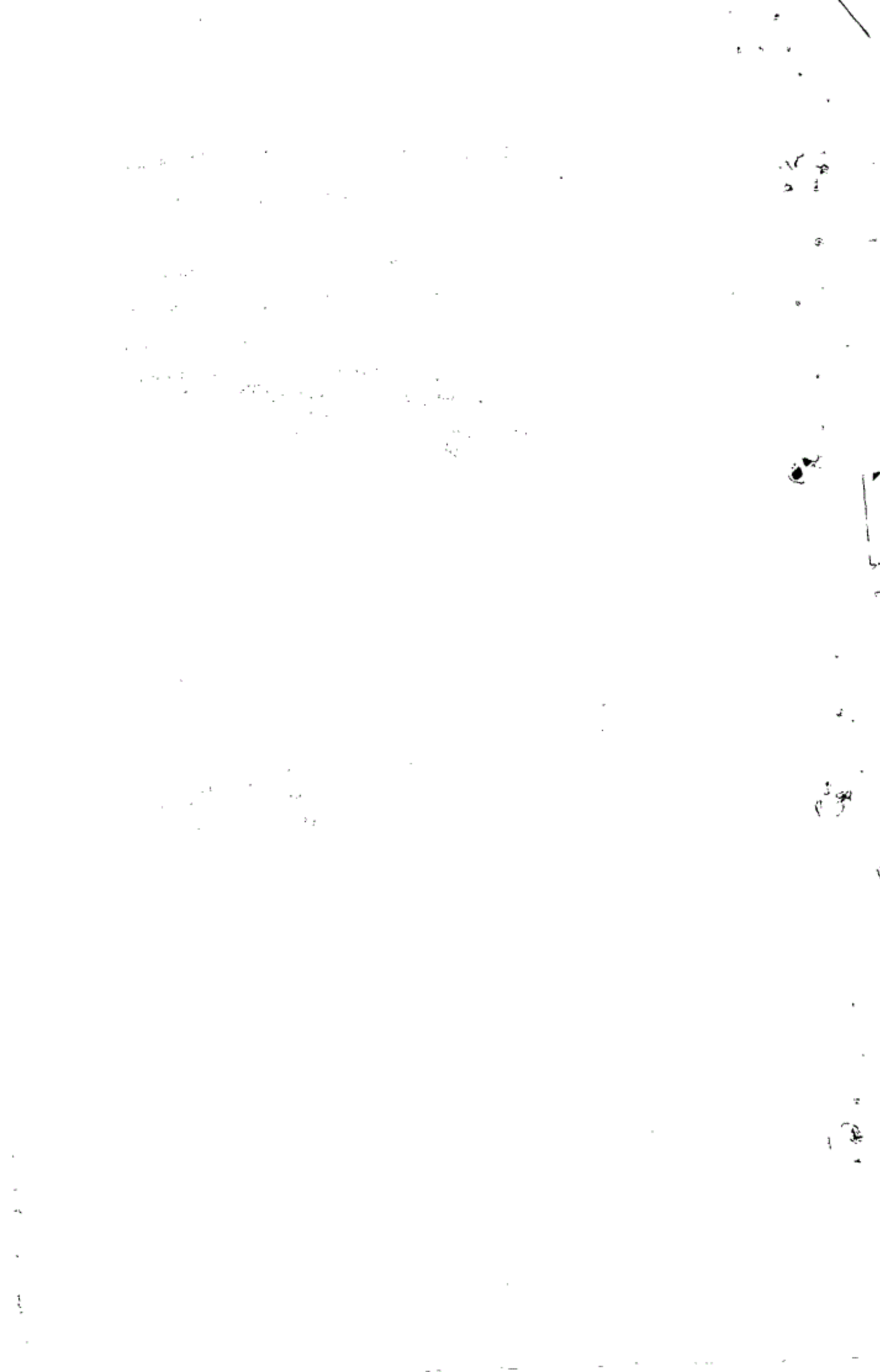


México, Distrito Federal, a **veintiséis** de--  
**junio** de mil novecientos sesenta y  
nueve.

R.7285/67

Pase este asunto, para su estudio,-  
al señor Ministro Orazco Romero, que substi-  
tuye al suscrito, a quien había sido turnado.

Lo acordó y publica el C. Presiden-  
te. Doy fe.





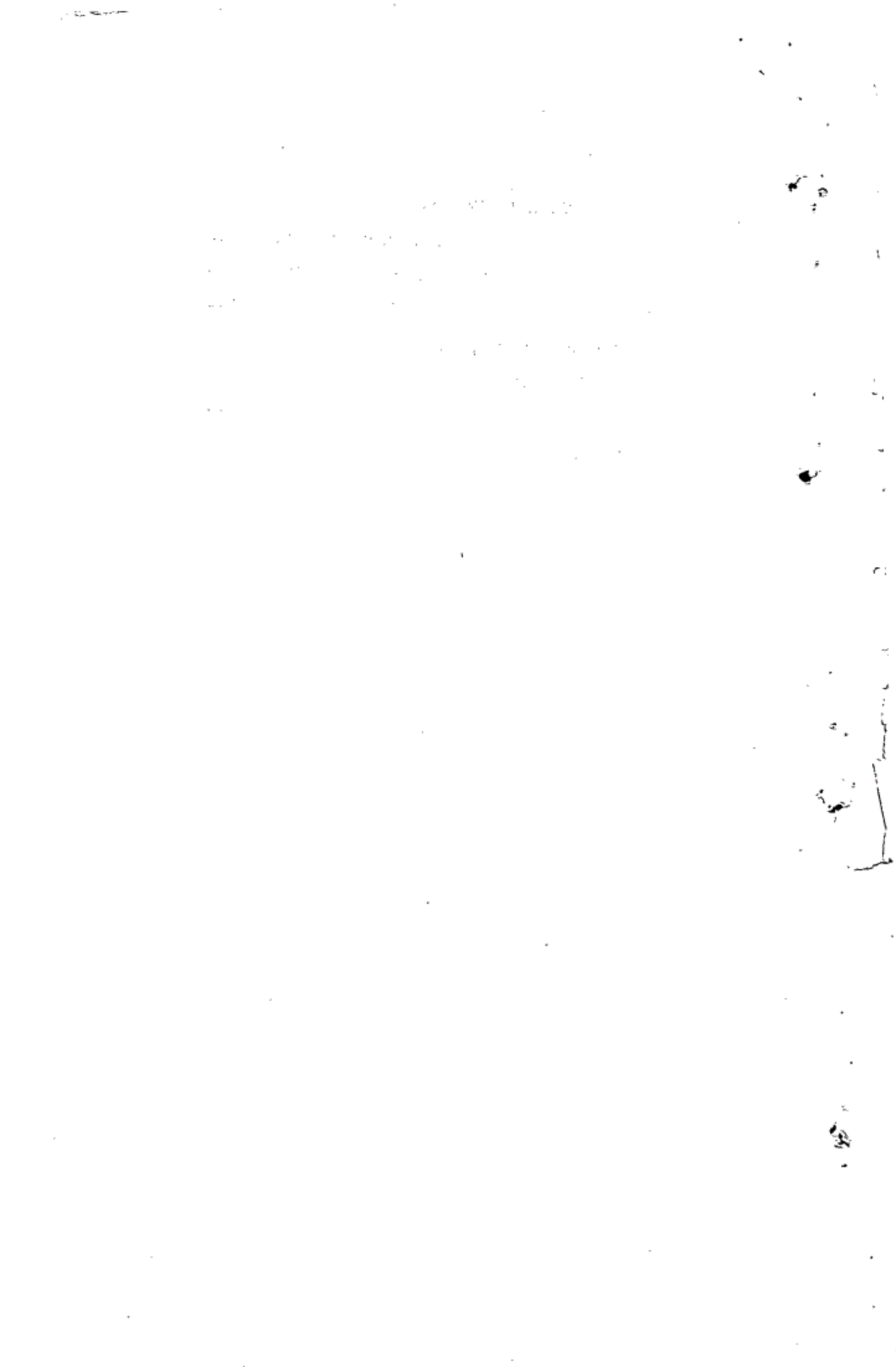
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

7285/67

México, Distrito Federal, a doce de  
noviembre de mil novecientos setenta.

Pase este asunto al C. Ministro --  
Guerrero López, que substituye al C. Minis-  
tro Orozco Romero, que renunció y a quien --  
había sido turnado.

Lo acordó y rubrica el C. Presi-  
dente. Doy fe.







SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

FORMA A-52

AMPARO EN REVISION No. 7285/67.  
QUEJOSO: OSCAR HERNANDEZ A. y-  
COAGRIVIADOS.

MINISTRO PONENTE: EUQUERIO GUERRERO LOPEZ.  
Secretario: Francisco M. Ramirez.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tri-  
bunal Pleno, Correspondiente al día

VISTOS; y

RESULTANDO:

Vo. Bo.

*J. L. Linares*  
PRIMERO.- Por escrito presentado el cuatro  
de agosto de mil novecientos sesenta y siete, ante  
el Juez de Distrito en Chihuahua, NATIVIDAD TORRES --  
DUARTE, OSCAR HERNANDEZ ALMEIDA, BENJAMIN JUAREZ PE-  
REZ, TADEO TERRAZAS VAZQUEZ, ROBERTO DOMINGUEZ GONZA-  
LEZ ADOLFO PEREGRINO RIOS, RAHONA TELLO DE GOMEZ, E-  
METERIO PEREZ ARMENDARIZ, SALOMON OAXACA ERIVES, AN-  
TONIA PEREGRINO VDA. DE DURAZO, SALVADOR DANIEL MEN-  
DOZA, MARIA EMMA CABALLERO DE PEREZ, EUSTORGIO ARMEN-  
DARIZ CHAVEZ, REBECA HERMOSILLO PEREZ, FRANCISCO GAR-  
CIA SANDOVAL, ELICERIO SALAZAR ZAMORA, MIGUEL HERNAN-  
DEZ MARTINEZ, HECTOR CARRILLO CASAVANTES, GUADALUPE-  
AGUAYO DE DOMINGUEZ, JESUS ISAAC DOMINGUEZ, JOSE VI-  
LLALOBOS MARQUEZ, ANTONIO MENDOZA DAILON, URIEL ERI-  
VES RODRIGUEZ, LIBRADA ARMENDARIZ CHAVEZ, SANTIAGO -  
ARMENDARIZ AGUIRRE, LUIS ADAM SAINZ, CLEOTILDE MELE-  
RO SOTO, JESUS VILLALBA SABADO, JESUS ESTRADA ARMEN-  
TA, MARIA ZAPATA VDA. DE GASTELLUM, ARTURO JUAREZ --  
FLORES, CONCEPCION OCHOA VDA. DE RASCON, VALENTIN PE-  
REZ ARMENDARIZ, EVA HERNANDEZ DOMINGUEZ DE PONS, MA-

RIA ESCARSEGA DE GONZALEZ, JESUS NAVA HERNANDEZ, REFUGIO FLORES CASTILLO, CARLOS ARRENDARIZ AGUIRRE, CELIA MOLINA DE JAQUEZ, FRANCISCO TERAN LOYA, TEODORA-PEREZ DE ESCARSEGA, JESUS DOMINGUEZ ACOSTA, SAMUEL ESTRADA ESTRADA, RICARDO ALMEIDA ACOSTA, EMILIO RAMIREZ VILLALOBOS, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado en Chihuahua, Gobernador de la misma Entidad, Tesorero General del Estado y Recaudador de Rentas de Ciudad Madero Chihuahua; actos que hicieron consistir:

Del H. Congreso del Estado, reclamamos la expedición del Decreto Número 293, que fue publicado en el PERIODICO OFICIAL del Estado el día diecisiete del mes de junio último y que ha entrado en vigor a partir del día primero del mes en curso, estableciendo un impuesto adicional SOBRE TODOS LOS IMPUESTOS ORDINARIOS, DERECHOS Y PRODUCTOS a que se refiere el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, y cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua.- Del C. Gobernador del Estado, reclamamos la firma y promulgación del Decreto citado. Del C. Tesorero General del Estado, reclamamos el refrendo y actos de ejecución del Decreto.- Del C. Recaudador de Rentas, los actos de su ejecución".

Señalan como garantías violadas las que consagran los artículos 30., 14 y 16 de la Constitución Federal.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

- 3 -

REV. 7285/67.

SEGUNDO.- Relatan los quejosos como antece-  
dentes:

"1o.- Los suscritos somos causantes de impuestos al Estado que debemos pagar en la Recaudación de Rentas, como lo comprobamos con los anexos que acompañamos.- 2.- La Ley de Egresos del Estado de fecha 31 de diciembre de 1966, fija la distribución que deberá darse a los impuestos que deberán recaudarse durante el año de 1967; y en esa Ley se señala en su partida 217, fracciones 4 y 5, la suma de \$4.630,000, para la Universidad de Chihuahua, que este Organismo recibirá durante el año en curso.- 3.- Pero en el Núm. 48 del Periódico Oficial del Estado, de fecha 17 de junio último, se publicó el Decreto Núm. 293 expedido por el Congreso del Estado, estableciendo un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios, derechos y productos a que se refiere el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, para aplicar su rendimiento, única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. La vigencia de este decreto, es a partir del día primero del mes en curso".

TERCERO.- Los quejosos formularon como con-  
ceptos de violación los siguientes:

"I.- El decreto impugnado, viola en nues-  
tro agravio la fracción VII del Artículo 3o. Consti-  
tucional, que establece que la educación que imparta  
el Estado, será gratuita; en consecuencia, no puede-  
afectarse a los causantes de impuestos, con alguno -

que específicamente deba aplicarse a la educación -  
que el Estado imparta".

"Por tanto, el Congreso del Estado, al --  
crear el Impuesto del 4% específicamente para desti-  
narlo EXCLUSIVAMENTE al sostenimiento de la Universi-  
dad de Chihuahua, viola lo dispuesto por el Artículo  
3o. de la Constitución Política Mexicana, en su frac-  
ción VII y viola en nuestro perjuicio la garantía de  
legalidad que nos conceden los artículos 14 y 16 --  
Constitucionales".

"II.- El Congreso del Estado viola en nues-  
tro agravio el Artículo 64, fracción VI de la Consti-  
tución Política del Estado, que dice literalmente: -  
"Art. 64.- Son atribuciones del Congreso:... VI.- Fi-  
jar anualmente todos los gastos de la Administración  
Pública del Estado, previo examen del presupuesto que  
presente el Ejecutivo"; y viola en nuestro perjuicio  
el artículo 163 de la misma Constitución, que estable-  
ce categóricamente: "Art. 163. El año fiscal para el  
Estado y los Municipios, se contará del primero de -  
enero al treinta y uno de diciembre de cada año". A-  
hora bien, si el Congreso del Estado, mediante decre-  
to Núm. 216 de 31 de enero de 1966, fijó los gastos-  
para el año que cursa, al fijar nuevos gastos, sin -  
tener facultades para ello y contraviniendo los sis-  
temas procesales en materia hacendaria, viola en --  
nuestro agravio los artículos 14 y 16 Constituciona-  
les".

"III.- El Congreso del Estado, en el Decre



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

- 5 -

FORMA A-53

REV, 7285/67.

to que se estudia, viola en nuestro agravio los principios de proporción y equidad, puesto que grava no PERCEPCIONES, sino EROGACIONES, como son los impuestos gravados por el mismo Decreto. No conocemos, hasta ahora, ley alguna que establezca que las erogaciones son sujetos de impuestos. Esto constituye un rompimiento con la técnica de tributación, pues todo impuesto nace de un bien o un servicio prestados por el Estado y recibido por el causante; pero es absurdo que un impuesto cause otro impuesto, o sea que una erogación resulte gravable, como en el caso que nos ocupa. Por tanto el Decreto carece de equidad y viola el Artículo 31 fracción IV de la Constitución General de la República, siendo aplicable la tesis jurisprudencial que dice textualmente: "Si bien el Artículo 31 Constitucional que establece los requisitos de proporción y equidad del impuesto como derechos de un contribuyente, no está en el Capítulo relativo a las garantías individuales, la lesión de ese derecho es una violación de esas garantías. (Sem. Jud. de la Fed. Tomo XX, Pág. 931 y Tomo XXI, Págs.- 950 y 2035)."

"IV.- El Gobernador del Estado, al firmar y promulgar el Decreto Núm. 984 que crea un impuesto SOBRE TODOS LOS IMPUESTOS ORDINARIOS, DERECHOS Y PRODUCTOS, para aplicarlo única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, viola en nuestro perjuicio la garantía de legalidad que nos concede los Artículos 14 y 16 Constitucionales, ya -



que sus actos carecen de fundación y motivación."

"El C. Tesorero General del Estado, por las razones que se han dejado expuestas, al refren--  
dar el decreto de que se trata, exigiéndonos obliga--  
ciones creadas por el mismo Decreto, viola en nues--  
tro perjuicio la citada garantía de legalidad".

"VI.- Finalmente, el Recaudador de Rentas, al ordenar se exija el cumplimiento de las obligacio--  
nes nacidas de un Decreto que grava TODOS LOS IMPUES  
TOS Y DERECHOS, con un 4% destinado única y exclusi--  
vamente a la Universidad de Chihuahua, viola en nues--  
tro perjuicio la garantía de legalidad que nos conce--  
den los artículos 14 y 16 Constitucionales".

"CUARTO.- El Juez de Distrito admitió la -  
demanda por auto de cinco de agosto de mil novecien--  
tos sesenta y siete y seguido el juicio por sus trá--  
mites legales dictó sentencia con los siguientes pun--  
tos resolutivos:

"Primero.- Se sobresee el presente juicio-  
de garantías pormovido por OSCAR HERNANDEZ A. y coa--  
graviados respecto al refrendo del Decreto Núm. 293-  
que reclaman del C. Tesorero General del Estado".

"Segundo.- La Justicia de la Unión no ampa--  
ra ni protege a NATIVIDAD TORRES DUARTE, OSCAR HER--  
NANDEZ ALMEIDA, BENJAMIN JUAREZ PEREZ, TADEO TERRA--  
ZAS VAZQUEZ, ROBERTO DOMINGUEZ GONZALEZ, ADOLFO PERE--  
GRINO RIOS, RAMONA TELLO DE GOMEZ, EMETERIO PEREZ AR--  
MENDARIZ, SALOMON OAXACA ERIVES, ANTONIA PEREGRINO -  
VDA. DE DURAZO, SALVADOR DANIEL MENDOZA, MARIA EMMA--  
CABALLERO DE PEREZ, EUSTORGIO ARMENDARIZ CHAVEZ, RE-



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

- 7 -

REV. 7285/67.

BECA HERMOSILLO PEREZ, FRANCISCO GARCIA SANDOVAL, E-  
LICERIO SALAZAR ZAMORA, MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ, -  
HECTOR CARRILLO CASAVANTES, GUADALUPE AGUAYO DE DO--  
MINGUEZ, JESUS ISLA DOMINGUEZ, JOSE VILLALOBOS MAR-  
QUEZ, ANTONIO MONTOYA DAILON, URIEL BRIVES RODRIGUEZ,  
LIBRADA ARMENDARIZ CHAVEZ, SANTIAGO ARMENDARIZ AGUI-  
RRE, LUIS ADAN SAENZ, CLEOTILDE MILLERO SOTO, JESUS -  
VILLALBA SABADO, JESUS ESTRADA ARGENTA, MARIA ZAPATA  
VDA, DE CASTELLUM, ARTURO JUAREZ FLORES, CONCEPCION-  
COCHA VDA. DE RASCON, VALENTIN PEREZ ARMENDARIZ, EVA  
HERNANDEZ DOMINGUEZ DE PONS, MARIA ESCARSEGA DE GON-  
ZALEZ, JESUS NAVA HERNANDEZ, REFUGIO FLORES CASTILLO,  
CARLOS ARMENDARIZ AGUIRRE, CELIA MOLINA DE JAQUEZ, -  
FRANCISCO TERAN LOYA, TEODORA PEREZ DE ESCARSEGA, JE-  
SUS DOMINGUEZ ACOSTA, SAMUEL ESTRADA ESTRADA, RICAR-  
DO ALMEIDA ACOSTA, EMILIO RAMIREZ VILLALOBOS, contra  
los actos que reclaman del H. Congreso del Estado, -  
Gobernador Constitucional del Estado y Recaudador de  
Rentas del Estado consistentes en la expedición, pro-  
mulgación, aplicación y ejecución del mencionado De-  
creto".

La sentencia se apoya en las siguientes -  
consideraciones:

"Los conceptos de violación son infundados.  
En efecto, el decreto impugnado adicionó los artícu-  
los 2106 y 2079 del Código Administrativo del Estado,  
para quedar como sigue: "2106.- Los ingresos ordina-  
rios son aquellos que se obtienen normalmente para -  
la atención del gasto público con este mismo carác-  
ter se establece un impuesto adicional de 4% sobre -



todos los impuestos ordinarios y derechos a que se refiere este artículo, cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Artículo 2079.- A la Tesorería General del Estado ingresarán todos los caudales públicos pertenecientes al Estado, de acuerdo con lo establecido en este Código y su Reglamento. Los ingresos que le corresponda percibir a la Universidad de Chihuahua, de conformidad con lo establecido por el artículo 2106, serán recaudados por las Oficinas Receptoras, simultáneamente con el entero de los impuestos ordinarios, cuyo rendimiento se concentrará directamente en la Tesorería General del Estado, -- quien lo entregará al Patronato de la Universidad de Chihuahua". De la simple lectura de los artículos -- transcritos se advierte que no es verdad lo que afirman los quejosos de que se establece un gravamen o retribución por la educación universitaria que imparte el Estado de Chihuahua, pues para poder coincidir en el evento que se menciona en los conceptos de violación, era necesario que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad a recibir enseñanza o que gravara de cualquier forma la instrucción universitaria, lo que no sucede, sino -- que el decreto, al adicionar el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, establece un aumento del 4% en la tasa de los impuestos ordinarios, derechos y productos que percibe el Estado, para ser destinado al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Por lo que los preceptos impugnados no gravan la educación universitaria, sino que el impuesto re-



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

cae sobre todos los contribuyentes por las distintas actividades que desarrollan ya calificadas por el Estado y únicamente adiciona los impuestos que anteriormente pagaban con el 4% para destinarlo al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, que es un gasto público, como lo requiere la Constitución en su artículo 31 fracción IV, ya que es indudable que tiene este carácter la educación universitaria a cargo del Estado, de conformidad con lo que ordena el artículo 30. de la Constitución Federal. El anterior criterio se basa en la Tesis Jurisprudencial número 28 publicada en las páginas 75 a 79 de la Primera Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación editado en 1965. En estas condiciones el decreto reclamado no es violatorio de los artículos 30. fracción VII, 14 y 16 de la Constitución."

En cuanto al segundo concepto de violación, tampoco es fundado, ya que la expedición del decreto impugnado, fue hecha por el Congreso del Estado en uso de las facultades que le confieren los artículos 64 fracciones I y VI y 162 de la Constitución Política del Estado, que establece, respectivamente, que son atribuciones del Congreso del Estado, legislar en todo lo concerniente al régimen interior del Estado, expidiendo cuantas leyes y demás disposiciones necesarias para su gobierno y administración, en todos los ramos y que uno y otra comprenden, fijar anualmente todos los gastos de la Administración pública y expedir las disposiciones hacendarias que es

blezcan las contribuciones necesarias para los gastos públicos y no podrá variarlas o modificarlas en vista del presupuesto de egresos. El artículo 2106 del Código Administrativo del Estado establece que son ingresos ordinarios aquellos que se obtienen normalmente para la atención de los gastos públicos; como el sostenimiento de la Universidad tiene ese carácter, es evidente que la Legislatura local está facultada legalmente para fijar el impuesto adicional de referencia. Por lo anterior se estima que los actos que se reclaman de la Legislatura local no violan los preceptos citados ni las garantías individuales consagradas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal".

El tercer concepto de violación es igualmente infundado. Los quejosos sostienen que el decreto en estudio viola los principios de proporción y equidad porque "grava no percepciones, sino erogaciones, como son los impuestos gravados por el mismo decreto". No es verdad lo anterior porque el impuesto no grava los otros impuestos sino que únicamente aumenta la tasa de los previamente establecidos y como dicho aumento es del 4% para todos queda la misma proporción, pues los que pagaban cien pesos, pagarán ciento cuatro pesos y los que tenían impuestos por un mil pesos tendrán que pagar mil cuarenta pesos, o sea, que el aumento es proporcional y equitativo porque pone a todos los contribuyentes en la misma situación, por lo que no es violatorio del artículo 31 fracción IV de la Constitución Fede



- 11 -

REV. 7285/67.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

ral . La Tesis de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que se cita no es aplicable en la especie porque no apoya los conceptos de violación ni está relacionada con la cuestión planteada."

"Respecto de los actos que se hacen consistir en la expedición, promulgación, refrendo, aplicación y ejecución del decreto, solamente cabe agregar - que no siendo inconstitucional el decreto por las consideraciones expuestas con anterioridad tampoco lo son dichos actos, porque no se impugnan por vicios propios, - sino que su inconstitucionalidad se hace depender del - contenido del decreto".

"Como consecuencia de todo lo anterior se - estima que los actos reclamados no son violatorios de - los artículos 30, 14, 16 y 31 de la Constitución Federal por lo que corresponde negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan los quejosos".

QUINTO.- Inconformes los quejosos por conducto de su abogado interpusieron el recurso de revisión, mismo que les fue admitido por el Presidente de esta Suprema Corte con fecha veinte de septiembre de mil novecientos sesenta y siete. ...

El Agente del Ministerio Público Federal designado para intervenir en este asunto pidió que se con firme la sentencia recurrida.

## CONSIDERANDO :

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para conocer del presente recurso de revisión por interponerse contra sentencia dictada en un juicio de - amparo en el que se controvierte la constitucionalidad-

REV. 7285/67.

de una ley. Fracción IV bis inciso a) del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 84, fracción I inciso a) de la Ley de Amparo.

ASUNTO.- En el escrito de revisión se expresan los siguientes agravios:

"1o.- El Juez "á quo", en el Cuarto Considerando de la sentencia recurrida, dice a la letra:

"Los anteriores conceptos de violación, son infundados. En efecto, el decreto impugnado adiciona los artículos 2106 y 2079 del Código Administrativo en el Estado, para quedar como sigue:- "2106.- Los ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen normalmente para la atención del gasto público.- Con este mismo carácter se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos a que se refiere este Artículo, cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Artículo 2079.- A la Tesorería General del Estado ingresarán todos los caudales públicos pertenecientes al Estado, de acuerdo con lo establecido en este Código y su Reglamento.- Los ingresos que le corresponda percibir a la Universidad de Chihuahua, de conformidad con lo establecido por el Artículo 2106, serán recaudados por las Oficinas Receptoras, simultáneamente con el entero de los impuestos ordinarios, cuyo rendimiento se concentrará directamente en la Tesorería General del Estado, quien lo entregará al Patronato de la Universidad de Chihuahua". De la simple lectura de los Artículos transcritos, se advierte que no es verdad lo que afirman los que





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

- 13 -

REV. 7285/67.

josos de que se establece un gravamen o retribución por la educación universitaria que imparte el Estado de Chihuahua, pues para poder coincidir con el evento que se menciona en los conceptos de violación, era necesario - que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad a recibir la enseñanza o que gravara de cualquier forma la instrucción universitaria, - lo que no sucede, sino que el decreto, al adicionar el Artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, establece un aumento del 4% en la tasa de los impuestos ordinarios derechos y productos que percibe el Estado, para ser destinado al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Por lo que los preceptos impugnados no -- gravan la educación universitaria, sino que el impuesto recae sobre todos los contribuyentes por las distintas actividades que desarrollan ya calificadas por el Estado y únicamente adiciona los impuestos que anteriormente pagaban, con el 4% para destinarlo al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, que es un gasto público, como lo requiere la Constitución en su artículo 31 fracción IV, ya que es indudable que tiene ese carácter la educación universitaria a cargo del Estado, de conformidad con lo que ordena el Artículo 30. de la Constitución Federal. El anterior criterio se basa en la Tesis Jurisprudencial número 28 publicada en las páginas 75 a 79 - de la primera parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, editado en 1965. En estas condiciones el Decreto reclamado no es violatorio de los Artículos- 30. Fracción VII, 14 y 16 de la Constitución".

REV. 7285/67.

"Las anteriores consideraciones del "a quo", son incongruentes y contradictorias puesto que, sin que aparezca del Decreto impugnado ni una sombra siquiera de que el 4% que grava TODOS LOS INGRESOS ORDINARIOS y para destinarlo UNICA Y EXCLUSIVAMENTE al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, sea un aumento de tasa, la sentencia recurrida así lo declara enfáticamente y afirma que ese aumento de tasa, como piadosamente lo denomina, no grava la instrucción universitaria, puesto que, para que tal cosa ocurriera, sería necesario que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad a recibir la instrucción universitaria.- Este argumento nos llevaría a la conclusión de que en los colegios de paga, la instrucción resulta gratuita, debido a que, como los alumnos, por su natural dependencia económica, no hacen los pagos de sus colegiaturas, la instrucción que reciben no es a título oneroso".

"Como queda demostrado, el impuesto impugnado ha sido creado con el exclusivo fin de sostener a la Universidad de Chihuahua, en su misión educadora, con detrimento de los causantes de dicho impuesto y en contravención del Artículo 3o. Constitucional que establece categóricamente que la instrucción que imparta el Estado, debe ser gratuita. Por tanto éste debe ajustarse a sostener a la Universidad en la forma y términos que la Ley de Egresos del Estado en su Partida 217 fracciones IV y V señala, que destina para la Universidad la suma de \$4.630.000.00, sin que dicha partida pueda modificarse, sino con cargo a los gastos públicos y de acuerdo -





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

con el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Educación - Pública, reglamentaria del Artículo 3o. Constitucional. Tal disposición legal establece, entre otras condiciones, la capacidad del presupuesto y no faculta al Estado para fijar impuesto alguno para el sostenimiento específico de los centros educativos superiores; en consecuencia, el Juez a quo, al no tomar en consideración lo establecido por el precepto Constitucional invocado; - viola en agravio de los quejosos el principio de legalidad garantizado por los Artículos 14 y 16 Constitucionales".

"II.- La sentencia recurrida establece que el segundo concepto de violación es infundado, pretendiendo que la expedición del Decreto impugnado fue expedido por el Congreso del Estado en uso de las facultades que le confieren los artículos 64 fracciones I y VI y 162 de la Constitución Política del Estado. Tal apreciación es inexacta, porque si bien es cierto que la fracción I del Artículo 64 da facultades al Congreso para legislar en todo lo concerniente el régimen interior del Estado, expidiendo cuantas leyes y demás disposiciones sean necesarias para su Gobierno y administración, - también es cierto que la fracción VI del mismo Artículo, sólo faculta al Congreso para fijar anualmente todas las bases para la administración pública del Estado PRE VIO EXAMEN DEL PRESUPUESTO que presente el Ejecutivo; - el Artículo 162 invocado por el a quo, faculta al Congreso para expedir las disposiciones hacendarias que establezcan las contribuciones necesarias para los gastos públicos, en VISTA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, el cual no está facultado para modificar; además deberá sujetar

se a lo establecido por el Artículo 163 que establece que el año fiscal para el Estado y los Municipios se contará del 1o. de enero al 31 de diciembre de cada año. Por tanto las facultades del Congreso son limitadas, máxime cuando no fundó ni motivó el Decreto impugnado y establece un impuesto exclusivo, esto es: privativo, prohibido por la Constitución Política del Estado, como se ha demostrado anteriormente al establecer las restricciones establecidas en el artículo 162 de la misma, por la Constitución Federal, como se comprueba plenamente con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia definida:"

"De acuerdo con el artículo 31 fracción IV de la Carta Magna, para la validez constitucional de un impuesto, se requiere la satisfacción de tres requisitos fundamentales: primero, que sea proporcional; segundo, que sea equitativo, y tercero que se destine al pago de los gastos públicos. Si falta alguno de estos tres requisitos, necesariamente el impuesto será contrario a lo estatuido por la Constitución, ya que ésta no concedió una facultad omnimoda para establecer las exacciones que, a juicio del Estado, fueran convenientes, sino una facultad limitada por esos requisitos".

"Tomó LXV.- Arrigunaga Peón Manuel de Pág. 2723. Tomo LXIX.- Cabezut Alberto M. y Coags.- Pág. 398. Tomo LXIX, Cabezut M. y Coags. Pág. 5432.- Tomo LXXXIII, Bolaños García Fulgencio, Pág. 813.- Tomo LXXV, Mora Manuel F., Pág. 3603.- (Copilación del Semanario Judi-



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

REV. 7285/67.

cial de la Federación, Tomo LXX, Pág. 1000)".

"Por tanto, al dar interpretación indebida a las disposiciones constitucionales que se han citado y al no acatar la jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia, el Juez sentenciador falta a los más elementales principios de legalidad violándolos en nuestro agravio y en contravención de los Artículos 14 y 16 Constitucionales".

"III.- El Decreto impugnado de inconstitucionalidad, expresa con toda claridad y precisión: "Se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos..." No cabe, en consecuencia, ninguna interpretación gramatical ni lógica que no sea la que se expresa literalmente".

"Mucho menos cabe la interpretación arbitraria que pretende darle el Juez "a quo", en el sentido de que se trata de un aumento de tasa sobre los impuestos. Por tanto el decreto viola los más elementales principios de tributación y jamás se ha dado el caso de que las erogaciones, como son los impuestos gravados, sean motivo de tributación".

"Así pues, queda claro que el Decreto de que se trata, grava erogaciones y no percepciones, por lo que es a todas luces ilegal, injusto y monstruoso."

"Por tanto viola los principios de justicia y legalidad consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, y el Juez al no tomar en consideración las razones y fundamentos en que basamos nuestra demanda de amparo, viola en nuestro agravio dichas garantías constitucionales".

TERCERO.- Debe declararse firme el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida, por no existir agravios al respecto.

CUARTO.- Es infundado el primero de los agravios

que los recurrentes hacen valer. En este agravio se sostiene substancialmente, en su primera parte, que las consideraciones del Juez de Distrito son incongruentes y contradictorias, porque sin que aparezca en el decreto que se reclama que el impuesto adicional sea un aumento en la tasa de los impuestos ya establecidos, el juzgador lo declara enfáticamente en su sentencia, afirmando además que no grava la instrucción universitaria, cuando está plenamente demostrado que el tributo en cuestión está destinado al sostenimiento de la Universidad en su misión educadora y que por tal motivo se controviene el artículo 3o. de la Constitución Federal en que se dispone que la educación que imparte el Estado será gratuita.

No existe la contradicción que se atribuye al Juez de Distrito en los argumentos que fundan lo que aparece como primer considerando de su sentencia. Los quejosos en el primer concepto de violación que hacen valer en su demanda, sostienen en esencia que el decreto que impugnan es violatorio de la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Federal que establece que la educación que imparta el Estado será gratuita; que por lo tanto, no pueden establecerse impuestos como el que se reclama, destinados al sostenimiento de la Universidad del Estado de Chihuahua, sin violar dicho precepto Constitucional. El Juez a quo, al analizar este concepto de violación, lo estima infundado, considerando que conforme al artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, que crea el impuesto de 4%, no se está gravando en forma alguna la instrucción universitaria, pues el tributo no recae sobre los que acuden a la universidad para recibir instrucción, sino sobre todos los contribuyentes por las





REV. 7285/67.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACIÓN.

- distintas actividades que realicen, ya calificadas por el Estado y a quienes se les adicionen los impuestos que ya pagaban con el de nueva creación para el sostenimiento de la universidad, que es un gasto público al que debe contribuir el particular. En la consideración que se resume, no puede haber ni hay contradicción porque, en efecto, el impuesto que se combate no es un impuesto por recibir educación; consecuentemente, no se contraviene el mandato constitucional de que la educación se imparta en forma gratuita por el Estado. El precepto que lo establece lo considera, según los términos del artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, como un ingreso ordinario que se destina a la atención del gasto público, y lo adiciona a los impuestos ordinarios y derechos que tributan los diversos causantes en las actividades que, como dice el Juez de Distrito, ya fueron calificadas por la Hacienda Local. Se trata de una contribución al gasto público que va a satisfacer las necesidades de la colectividad para un fin específico como es la educación que el Estado otorga a la juventud, para el desarrollo cultural, social y económico de la propia entidad y, por ende, de la Nación Mexicana.

Ahora bien, si se trata de un gasto público que debe satisfacerse con la contribución de todos los habitantes de Chihuahua, el hecho de que el Estado fije en una ley un tributo, para sostener dicho gasto público, no implica, por la circunstancia de que se precise cualva a ser el destino de ese tributo, que se está cobrando la educación, y en este caso resulta acertada la consideración del Juez de Distrito que, para que tal cosa sucediera, se requeriría que ese tributo recayera sobre el -

- educando, ya que entonces sí se haría nugatorio el mandato constitucional de impartir gratuitamente la enseñanza.

En su segunda parte el agravio se refiere a que el Estado debe sujetarse a la partida 217, fracción IV y V de la Ley de Egresos del propio Estado, que destina para la Universidad \$ 4,630,000.00 anuales, sin que dicha partida pueda modificarse sino con cargo a los gastos públicos y de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria del artículo 30. Constitucional. Que esta disposición legal no faculta al Estado para fijar impuesto alguno para el sostenimiento específico de los centros educativos superiores. Como se ve en esta segunda parte del agravio se vuelve a impugnar el decreto número 293 por las mismas causas ya invocadas, o sea la pretendida oposición a los mandatos del artículo 30. Constitucional y se recurre a un concepto de ilegalidad al citar el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, sin parar mientes en que, según lo dispuesto en el artículo 20. de la propia Ley, este Ordenamiento no se aplica a las universidades dependientes de las entidades federativas, amén de que el citado artículo 23 no prohíbe la existencia de un impuesto adicional como el mencionado. El carácter de exclusividad del referido impuesto adicional del 4% sólo se menciona como un calificativo al mismo, sin que sea propiamente objeto del agravio.

Por lo demás, la ley que se combate en este amparo, adiciona, en efecto, los impuestos en general cuyas bases y tarifas están determinadas por las leyes en particular y las aumenta en un 4% sin que haya precepto



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

FORMA A-53

REV. 7285/67.

- constitucional que se lo impida, porque frente a la obligación del particular de contribuir al gasto público, está la facultad del Estado de imponer las contribuciones necesarias para satisfacer los gastos públicos - y si como se dejó establecido, el impuesto adicional no tiene el carácter de un impuesto a la educación porque no grava sobre los educandos, es evidente que el Estado, frente a las necesidades y fines que constituyen su esencia puede establecer un impuesto para destinarlo a un gasto público especial.

En consecuencia, la sentencia del Juez de Distrito se ajusta a la realidad tributaria y a los principios constitucionales que en el caso no se contravienen.

QUINTO.- El segundo agravio también resulta infundado por las siguientes razones.

Los recurrentes afirman que es inexacta la apreciación hecha por el Juez de Distrito, al declarar infundado el segundo concepto de violación, al considerar en su sentencia que el "Congreso del Estado expidió el Decreto que se impugna en uso de las facultades que le confieren los artículos 64 fracciones I y VI y 162 de la Constitución Política del Estado"; alegando dichos recurrentes, que si bien es cierto que el referido artículo 64 faculta al Congreso para legislar en todo lo concerniente al régimen interior del Estado; también lo es que la fracción VI del propio artículo solo lo faculta para fijar anualmente las bases para la administración pública, previo examen del presupuesto que presente el Ejecutivo; por lo que consideran los recurrentes que con ello se viola el mencionado artículo 162 y en consecuencia los artículos 14 y 16 de la Constitución -



- Federal, pero sin señalar en que consisten dichas violaciones al Pacto Federal.

El agravio es infundado ya que sus argumentos no son operantes para modificar las consideraciones del juzgador, en virtud de que los recurrentes confunden en sus alegaciones el acto de expedir leyes fiscales, (o de cualquier otra índole), que se estimen necesarias para el régimen interior del Estado, con la facultad de aprobar el presupuesto de egresos; facultad que no puede constituir un obstáculo para que el Congreso Legisle expida las leyes que considere necesarias; no quedando por lo tanto limitada su facultad legislativa, ni debiendo entremezclarse o confundirse un acto con otro.

Por lo anterior el Juez de Distrito obró correctamente al considerar en su sentencia que no existen violaciones a la Constitución Local, pues como quedó demostrado el Congreso del Estado de Chihuahua tiene facultades para legislar en todo lo que concierne al régimen interior del Estado, con la salvedad de aquellas materias reservadas por la Constitución Federal para el Congreso de la Unión, no comprendiéndose en estas las referidas a impuestos para fines educativos, ni la modificación de los presupuestos de egresos estatales.

De acuerdo con dicha facultad la Legislatura del Estado expidió el Decreto que se reclama, mismo que como se demostró no es violatorio de los artículos 30., 14 y 16 de la Carta Fundamental, y si la creación de ese impuesto modifica el Presupuesto de Egresos expedido para el año de 1966, tal modificación no convierte a la Ley en inconstitucional, toda vez que fué expedida por el órgano constitucionalmente autorizado. Podrá ser



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

- 23 -

REV. 7285/67.

- antitécnico que se modifique el Presupuesto durante el año de 1966; pero no es inconstitucional, ya que no se puede sostener validamente como pretenden hacerlo -- los recurrentes, que la aprobación del Presupuesto de Egresos para un año determinado sea un impedimento para que el Congreso legisle en materia de impuestos. Tal -- presupuesto de Egresos no puede tener, en materia de -- gastos, la rigidez que se pretende en el agravio que se estudia, pues siendo los fines del Estado resolver todos los problemas que afectan a la administración pública y a la colectividad no se le puede limitar para que por conducto del órgano respectivo dicte todas las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de esos -- fines.

El agravio, en su segunda parte, también es infundado, en cuanto sostienen los recurrentes que el impuesto es desproporcionado e inequitativo y que por tal motivo viola el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal.

En el caso a estudio la capacidad contributiva de los causantes quejosos está en relación con la de -- los demás causantes, lo cual se aprecia de la lectura de la ley reclamada; existiendo una perfecta distribución de la carga fiscal entre todos los causantes que se encuentran en los mismos presupuestos de la norma en estudio ya que la aplicación a todos los causantes con una tasa igual del 4% en relación a los impuestos que -- proporcionalmente ya les han sido fijados por otros -- conceptos, lo que demuestra que no tiene las características de inconstitucionalidad que se le pretende imputar. En cuanto a que se considere como privativo por -- dedicarse a un fin especial como es el sostenimiento de

- la Universidad del Estado, debe decirse que aplicando la tesis jurisprudencial número 17 del último Apéndice de jurisprudencia, no tiene tal carácter de la Ley privativa. La tesis de referencia sostiene lo siguiente:--

"LEYES PRIVATIVAS.- Es carácter constante de las leyes que sean de aplicación general y abstracta, (es decir, que deben contener una disposición que no desaparezca después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a ésta aplicación y se aplique sin consideración de especie o de personas a todos los casos idénticos al que previenen, en tanto no sean abrogadas). Una Ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad, garantizado por el artículo 13 Constitucional, y aún deja de ser una -- disposición legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Estas Leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como el cualquier otro orden, -- pues el carácter de generalidad se refiere a las leyes de todas las especies, y en contra de la aplicación de las leyes privativas protege el ya expresado artículo -- 13 constitucional."

El Decreto impugnado, reúne estos requisitos, -- de generalidad e igualdad, como puede constatarse de su sola lectura:

"Artículo 2106.- Los ingresos ordinarios son -- aquellos, que se obtienen normalmente para la atención del gasto público.

Con este mismo carácter se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos a que se refiere este artículo cuyo ren



REV. 7285/67.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

- dimiento será destinado única y exclusivamente al sos  
tenimiento de la Universidad de Chihuahua."

De la transcripción anterior se observa que el -  
artículo en cuestión no carece de abstracción y genera-  
lidad, no pudiendo por tanto considerarse que tenga el  
carácter de privativo.

SEXTO.- En el tercer agravio sostienen los re-  
currentes que en la redacción del decreto impugnado en-  
la parte que dice: "se establece un impuesto adicional-  
del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y dere-  
chos...." no cabe ninguna interpretación gramatical ni-  
lógica que no sea la que se expresa literalmente pues -  
sostienen que el impuesto se fija sobre otros impues-  
tos. El agravio es infundado puesto que como acertada-  
mente lo hace notar el Juez de Distrito con el decreto-  
impugnado no se gravan otros impuestos, ya que si así -  
fuera quien debería pagarlos sería el Estado, sin que -  
sufrieran perjuicio alguno los recurrentes. Las leyes-  
deben interpretarse fundadamente según su espíritu y --  
no apearse a la letra pues si de la simple lectura del  
artículo 2106, transcrito en el considerando quinto de-  
esta ejecutoria, pudiera suponerse que se gravan otros-  
impuestos, con una interpretación armonica de los dos -  
párrafos del citado artículo y con un simple razonamien-  
to de sentido común, se desprende que se trata de un --  
ingreso ordinario que se estableció como impuesto adicio-  
nal, o sea que no se gravan los otros impuestos, sino -  
que los mismos se adicionan en un 4%, consistiendo por-  
tanto en un aumento simple a los pre-existentes y de --  
ninguna manera en un impuesto sobre todos los demás im-  
puestos, por lo que el hecho generador del crédito fis-  
cal es el mismo ya establecido en cada uno de los impues

- tos anteriores, adicionando únicamente con el 4%.

SEPTIMO.- Conviene insistir en que solo por lo que ve al carácter que atribuyen los recurrentes en su primer organo al impuesto de ser contrario al artículo 30. Constitucional se alega en el aspecto exclusivo que contiene al destinarlo expresamente para el sostenimiento de la Universidad de Chihuahua.

Doctrinalmente es sabido que según el fin del impuesto, se pueden presentar tres casos: el primero -- en que el impuesto solo tiene fines fiscales y se destina a cubrir los gastos generales del Estado.

El segundo en que el impuesto tiene un fin fiscal, pero se aplica a ciertos gastos especiales, que es lo que ocurre en el presente caso y, por último, en el tercero en que el impuesto tiene fines extra-fiscales.

El artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Fundamental establece: "Son obligaciones de los mexicanos: IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

Ahora bien, esa obligación tiene por objeto la satisfacción de los gastos públicos que el Estado debe cubrir en beneficio de la colectividad. Que con los impuestos deban cubrirse los gastos públicos no constituye una prohibición, para que el tributo, por la ley del Congreso, se destine desde su origen a cubrir un gasto especial, si es en beneficio de la colectividad y a --- ello está obligado el Estado. Si alguna prohibición contiene el precepto, no es otra que la de que el impuesto se destine a fines diferentes a los del gasto público,-





REV. 7285/67.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

- pero en el caso se destinó al sostenimiento de la Uni  
versidad del Estado, que en un gasto público.

En consecuencia es correcta la consideración --  
que al respecto hace el Juez de Distrito en su senten--  
cia al referirse a la fracción IV del artículo 31 Cons--  
titucional, ya que mientras el impuesto se destine a un  
gasto público, se estará cumpliendo con el mandato cons--  
titucional de aplicar el impuesto a gastos en beneficio  
de la colectividad.

Este criterio fue sustentado en el amparo en --  
revisión 4431/56, promovido por la Sección de Técnicos--  
y Manuales del Sindicato de Trabajadores de la Produc--  
ción Cinematográfica de la República, fallado el dieci--  
séis de abril de mil novecientos setenta, por unanimi--  
dad de diecisiete votos de los Ministros: Alberto Oroz--  
co Romero, Carlos del Río Rodríguez, Mario G. Rebolledo,  
Alberto Jiménez Castro, Manuel Rivera Silva, Ezequiel --  
Burguete Farrera, Abel Huitrón y A., Rafael Rojina Vi--  
llegas, Enrique Martínez Ulloa, Jorge Iñárritu, Ernesto  
Solís López, Ramón Canedo Aldrete, María Cristina Sal--  
morán de Tamayo, Manuel Yáñez Ruíz, Mariano Ramírez Váz--  
quez, Pedro Guerrero Martínez y Presidente Alfonso Guz--  
mán Neyra.

Como un precedente que es muy importante seña--  
lar, debe citarse lo resuelto por ese H. Pleno de la Su--  
prema Corte de Justicia de la Nación en el amparo -----  
7284/67 en la sesión del 12 de enero de 1971 por unani--  
midad de votos de los señores Ministros: Eusebio Gue--  
rrero, Carlos del Río Rodríguez, Mario G. Rebolledo, --  
Alberto Jiménez Castro, Manuel Rivera Silva, Ezequiel -  
Burguete Farrera, Abel Huitrón y Aguado, Rafael Rojina--  
Villegas. Jorge Saracho Alvarez, Enrique Martínez Ulloa,

REV. 7285/67.

- Jorge Iñárritu, Ramón Canedo Aldrete, María Cristina-  
Salmorán de Tamayo, Manuel Yáñez Ruiz, Pedro Guerrero -  
Martínez, Salvador Mondragón Guerra, Ernesto Aguilar --  
Alvarez y Presidente Alfonso Guzmán Neyra, pues en tal-  
juicio de amparo: la demanda, la sentencia del Juez y -  
el escrito de expresión de agravios son IDENTICOS con -  
el cambio natural de nombres de los quejosos y fecha, -  
habiéndose negado el amparo y protección de la Justicia  
Federal a los quejosos.

Por lo expuesto y con fundamento además, en los  
artículos 163 fracción I, 107, fracciones VIII inciso -  
a) de la Constitución Federal; 84 fracción I inciso a)-  
y 91 de la Ley Orgánica, se resuelve:

PRIMERO.- Se declara firme el sobreseimiento --  
respecto al acto reclamado del Tesorero General del Es-  
tado de Chihuahua consistente en el refrendo del decreto  
293, expedido por el Congreso del Estado.

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia en la parte-  
que se revisa.

TERCERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni-  
protege a Oscar Hernández A., y conagraviados contra los  
actos del Congreso del Estado de Chihuahua, Gobernador-  
de la misma entidad y Recaudador de rentas del Estado,-  
consistentes en la expedición, promulgación, aplicación  
y ejecución del decreto mencionado en el punto anterior.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución-  
vuelvan los autos al Juzgado de su origen; y en su oportu-  
nidad archívese el tomo.

FMR/rmg.





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION.

FORMA A-53

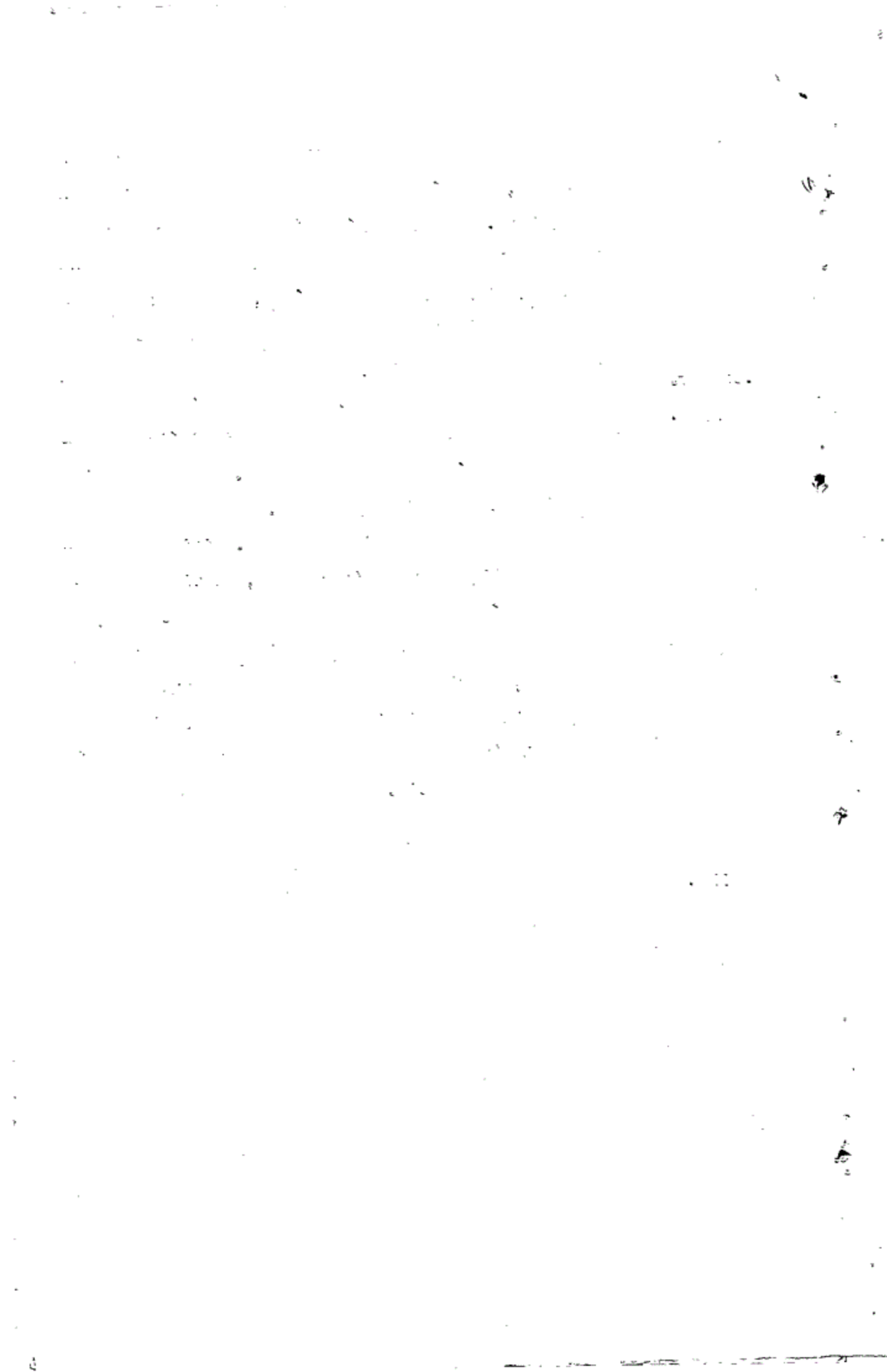
Amp.en Rev.

7285/967.

##dos de febrero de mil novecientos setenta y uno, se dió cuenta de este asunto al Tribunal Pleno. La Secretaría dió lectura a los puntos-resolutivos del proyecto formulado por el señor Ministro Guerrero López, en el sentido de declarar firme el sobreseimiento respecto del acto del Tesorero, confirmar la sentencia y negar el amparo respecto de los demás actos y autoridades. Por unanimidad de dieciséis votos se aprobó el proyecto; y el C. Presidente hizo la declaratoria respectiva.

No asistieron los CC. Ministros Rojina Villegas y Martínez Ulloa, previo aviso; -- del Río por estar haciendo uso de licencia, y Rivera Silva por estar haciendo uso de vacaciones, en virtud de haberse quedado integrando la última comisión de receso. El C. Ministro Huitrón no estuvo presente durante la votación de este negocio.

lha.



Amp.en Rev.Núm.7285/967.- Promovido por Oscar Hernández A.y coagraviados, contra  
actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades.  
ACUERDO PLENO del día 2 de febrero de 1971.

¿Se aprueban los puntos resolutivos del proyecto formulado por el señor Minis-  
tro Guerrero López?

<u>SI.</u>		<u>NO.</u>
_____ / _____	GUERRERO LOPEZ	_____
_____ / _____	DEL RIO	<u>No asistió (por estar haciendo uso de licencia)</u>
_____ / _____	REBOLLEDO	_____
_____ / _____	JIMENEZ CASTRO	_____
_____ / _____	RIVERA SILVA	<u>No asistió (por estar haciendo uso de vacaciones)</u>
_____ / _____	BURGUETE	_____
_____ / _____	HUITRON	<u>Ausente.</u>
_____ / _____	ROJINA VILLEGAS	<u>No asistió.</u>
_____ / _____	SARACHO ALVAREZ	_____
_____ / _____	MARTINEZ ULLOA	<u>No asistió.</u>
_____ / _____	IÑARRITU	_____
_____ / _____	AZUELA	_____
_____ / _____	SOLIS LOPEZ	_____
_____ / _____	CANEDO	_____
_____ / _____	SALMORAN DE TAMAYO	_____
_____ / _____	YAÑEZ	_____
_____ / _____	RAMIREZ VAZQUEZ	_____
_____ / _____	GUERRERO MARTINEZ	_____
_____ / _____	MONDRAGON GUERRA	_____
_____ / _____	AGUILAR ALVAREZ	_____
_____ / _____	GUZMAN NEYRA	_____

Unanimidad de 16 votos.

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68

10-10-68



AMPARO EN REVISION No. 7285/67.  
QUEJOSO: OSCAR HERNANDEZ A. y-  
COAGRAVIADOS.

MINISTRO PONENTE: EUQUERIO GUERRERO LOPEZ.  
Secretario: Francisco M. Ramirez.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tri-  
bunal Pleno, Correspondiente al días dos de febrero de  
mil novecientos setenta y uno.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito presentado el cuatro  
de agosto de mil novecientos sesenta y siete, ante -  
el Juez de Distrito en Chihuahua, NATIVIDAD TORRES --  
DUARTE, OSCAR HERNANDEZ ALMEIDA, BENJAMIN JUAREZ PE-  
REZ, TADEO TERRAZAS VAZQUEZ, ROBERTO DOMINGUEZ GONZA-  
LEZ ADOLFO PEREGRINO RIOS, RALONA TELLO DE GOMEZ, E-  
METERIO PEREZ ARMENDARIZ, SALOMON CAKACA ERIVES, AN-  
TONIA PEREGRINO VDA. DE DURASO, SALVADOR DANIEL MEN-  
DOZA, MARIA EMMA C. BALMERO DE PEREZ, EUSTORGIO ARMEN-  
DARIZ CHAVEZ, REBECA HERMOSILLO PEREZ, FRANCISCO GAR-  
CIA SANDOVAL, ELICERIO SALAZAR SALORA, MIGUEL HERNAN-  
DEZ MARTINEZ, HECTOR CARRILLO CASAVANTES, GUADALUPE-  
AGUAYO DOMINGUEZ, JESUS ISAAC DOMINGUEZ, JOSE VI-  
LLALOBOS MARQUEZ, ANTONIO MENDOZA DAILON, URIEL ERI-  
VES RODRIGUEZ, LIBRADA ARMENDARIZ CHAVEZ, SANTIAGO -  
ARMENDARIZ AGUIRRE, LUIS ADAN GARCIA, CECOTILDE MELE-  
RO SOTO, JESUS VILLALBA SANCHEZ, JESUS ESTRADA ARMEN-  
TA, MARIA ZAPATA VDA. DE GASTELLUM, ARTURO JUAREZ --  
FLORES, CONCEPCION OCHOA VDA. DE RASCON, VALENTIN PE-  
REZ ARMENDARIZ, EVA HERNANDEZ DOMINGUEZ DE PONS, MA-

RIA ESCARSEGA DE GONZALEZ, JESUS NAVA HERNANDEZ, REFUGIO FLORES CASTILLO, CARLOS ARMENDARIZ AGUIRRE, CELIA MOLINA DE JAQUEZ, FRANCISCO TERAN LOYA, TEODORA-PEREZ-DE ESCARSEGA, JESUS DOMINGUEZ ACOSTA, SAMUEL ESTRADA ESTRADA, RICARDO ALMEIDA ACOSTA, EMILIO RAMIREZ VILLALOBOS, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado en Chihuahua, Gobernador de la misma Entidad, Tesorero General del Estado y Recaudador de Rentas de Ciudad Madero Chihuahua; actos que hicieron consistir:

Del H. Congreso del Estado, reclamamos la expedición del Decreto Número 293, que fue publicado en el PERIODICO OFICIAL del Estado el día diecisiete del mes de junio último y que ha entrado en vigor a partir del día primero de julio de 1967, estableciendo un impuesto adicional SOBRE TODOS LOS IMPUESTOS ORDINARIOS, DERECHOS Y PRODUCTOS a que se refiere el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, y cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua.- Del C. Gobernador del Estado, reclamamos la firma y promulgación del Decreto citado. Del C. Tesorero General del Estado, reclamamos el refrendo y actos de ejecución del Decreto.- Del C. Recaudador de Rentas, los actos de su ejecución".

Señalan como garantías violadas las que consagran los artículos 3o., 14 y 16 de la Constitución Federal.





- 3 -

REV. 7285/67.

SEGUNDO.- Relatan los quejosos como antecedentes:

"1o.- Los suscritos somos causantes de impuestos al Estado que debemos pagar en la Recaudación de Rentas, como lo comprobamos con los anexos que acompañamos.- 2.- La Ley de Egresos del Estado de fecha 31 de diciembre de 1966, fija la distribución que deberá darse a los impuestos que deberán recaudarse durante el año de 1967; y en esa Ley se señala en su partida 217, fracciones 4 y 5, la suma de \$4.630.000, para la Universidad de Chihuahua, que este Organismo recibirá durante el año en curso.- 3.- Pero en el Núm. 48 del Periódico Oficial del Estado, de fecha 17 de junio último, se publicó el Decreto Núm. 293 expedido por el Congreso del Estado, estableciendo un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios, derechos y productos a que se refiere el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, para aplicar su rendimiento, única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. La vigencia de este decreto, es a partir del día primero del mes en curso".

TERCERO.- Los quejosos formularon como conceptos de violación los siguientes:

"I.- El decreto impugnado, viola en nuestro agravio la fracción VII del Artículo 3o. Constitucional, que establece que la educación que imparta el Estado, será gratuita; en consecuencia, no puede afectarse a los causantes de impuestos, con alguno -

que específicamente deba aplicarse a la educación --  
que el Estado imparta".

"Por tanto, el Congreso del Estado, al --  
crear el Impuesto del 4% específicamente para desti-  
narlo EXCLUSIVAMENTE al sostenimiento de la Universi-  
dad de Chihuahua, viola lo dispuesto por el Artículo  
3o. de la Constitución Política Mexicana, en su frac-  
ción VII y viola en nuestro perjuicio la garantía de  
legalidad que nos conceden los artículos 14 y 16 --  
Constitucionales".

"II.- El Congreso del Estado viola en nues-  
tro agravio el Artículo 64, fracción VI de la Consti-  
tución Política del Estado, que dice literalmente: -  
"Art. 64.- Son atribuciones del Congreso:... VI.- Fi-  
jar anualmente todos los gastos de la Administración  
Pública del Estado, previo examen del presupuesto que  
presente el Ejecutivo"; y viola en nuestro perjuicio  
el artículo 163 de la misma Constitución, que estable-  
ce categóricamente: "Art. 163. El año fiscal para el  
Estado y los Municipios, se contará del primero de -  
enero al treinta y uno de diciembre de cada año". A-  
hora bien, si el Congreso del Estado, mediante decre-  
to Núm. 216 de 31 de enero de 1966, fijó los gastoa-  
para el año que cursa, al fijar nuevos gastos, sin -  
tener facultades para ello y contraviniendo los sis-  
temas procesales en materia hacendaria, viola en --  
nuestro agravio los artículos 14 y 16 Constituciona-  
les".

"III.- El Congreso del Estado, en el Decre

REV. 7285/67.



to que se estudia, viola en nuestro agravio los principios de proporción y equidad, puesto que grava no PERCEPCIONES, sino EROGACIONES, como son los impuestos gravados por el mismo Decreto. No conocemos, hasta ahora, ley alguna que establezca que las erogaciones son sujetos de impuestos. Esto constituye un rompimiento con la técnica de tributación, pues todo impuesto nace de un bien o un servicio prestados por el Estado y recibido por el causante; pero es absurdo que un impuesto cause otro impuesto, o sea que una erogación resulte gravable, Como en el caso que nos ocupa. Por tanto el Decreto carece de equidad y viola el Artículo 31 fracción IV de la Constitución General de la República, siendo aplicable la tesis jurisprudencial que es textualmente: "Si bien el Artículo 31 Constitucional que establece los requisitos de proporción y equidad del impuesto como derechos de un contribuyente, no está en el Capítulo relativo a las garantías individuales, la lesión de ese derecho es una violación de esas garantías. (Sem. Jud. del Fed. Tomo XX, Pág. 931 y Tomo XXI, Págs.- 950 y 2035)."

"IV.- El Gobernador del Estado, al firmar y promulgar el Decreto Núm. 293 que crea un impuesto SOBRE TODOS LOS IMPUESTOS ORDINARIOS, DERECHOS Y PRODUCTOS, para aplicarlo única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, viola en nuestro perjuicio la garantía de legalidad que nos concede los Artículos 14 y 16 Constitucionales, ya -

que sus actos carecen de fundación y motivación."

"El C. Tesorero General del Estado, por las razones que se han dejado expuestas, al refren--  
dar el decreto de que se trata, exigiéndonos obligaciones creadas por el mismo Decreto, viola en nues--  
tro perjuicio la citada garantía de legalidad".

"VI.- Finalmente, el Recaudador de Rentas, al ordenar se exija el cumplimiento de las obligacio--  
nes nacidas de un Decreto que grava TODOS LOS IMPUES--  
TOS Y DERECHOS, con un 4% destinado única y exclusi--  
vamente a la Universidad de Chihuahua, viola en nues--  
tro perjuicio la garantía de legalidad que nos conce--  
den los artículos 14 y 16 Constitucionales".

"CUARTO.- El Juez de Distrito admitió la -  
demanda por auto de cinco de agosto de mil novecien--  
tos sesenta y siete y seguido el juicio por sus trá--  
mites legales dictó sentencia con los siguientes pun--  
tos resolutivos:

"Primero.- Se sobresee el presente juicio--  
de garantías pormovido por OSCAR HERNANDEZ A. y coa--  
graviados respecto al refrendo del Decreto Núm. 293--  
que reclaman del C. Tesorero General del Estado".

"Segundo.- La Justicia de la Unión no ampa--  
ra ni protege a NATIVIDAD TORRES DUARTE, OSCAR HER--  
NANDEZ ALMEIDA, BENJAMIN JUAREZ PEREZ, TADEO TERRA--  
ZAS VAZQUEZ, ROBERTO DOMINGUEZ GONZALEZ, ADOLFO PERE--  
GRINO RIOS, RAMONA TELLO DE GOMEZ, EMETERIO PEREZ AR--  
MENDARIZ, SALOMON OALACA ERIVES, ANTONIA PEREGRINO -  
VDA, DE DURAZO, SALVADOR DANIEL MENDOZA, MARIA EMMA--  
CABALLERO DE PEREZ, EUSTORGIO ARMENDARIZ CHAVEZ, RE-

REV. 7285/67.



BECA HERMOSILLO PEREZ, FRANCISCO GARCIA SANDOVAL, E-  
 LICERIO SALAZAR ZAMORA, MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ, -  
 HECTOR CARRILLO CASAVANTES, GUADALUPE AGUAYO DE DO--  
 MINGUEZ, JESUS ISLA DOMINGUEZ, JOSE VILLALOBOS MAR-  
 JUEZ, ANTONIO MONTOYA DAILON, URIEL ERIVES RODRIGUEZ,  
 LIBRADA ARMENDARIZ CHAVEZ, SANTIAGO ARMENDARIZ AGUI-  
 RRE, LUIS ADAM SAENZ, CLEOTILDE MILLERO SOTO, JESUS -  
 VILLALBA SABADO, JESUS ESTRADA ARMENTA, MARIA ZAPATA  
 VDA, DE CASTELLUM, ARTURO JUAREZ FLORES, CONCEPCION-  
 OCHOA VDA. DE RASCON, VALENTIN PEREZ ARMENDARIZ, EVA  
 HERNANDEZ DOMINGUEZ DE PONS, MARIA ESCARSEGA DE GON-  
 ZALEZ, JESUS NAVA HERNANDEZ, REFUGIO FLORES CASTILLO,  
 CARLOS ARMENDARIZ AGUIRRE, CELIA MOLINA DE JAQUEZ, -  
 FRANCISCO TERAN LOYA, TEODORA PEREZ DE ESCARSEGA, JE  
 SUS DOMINGUEZ ACOSTA, SANTIAGO ESTRADA ESTRADA, RICAR-  
 DO ALMEIDA ACOSTA, FELIC RIVERA VILLALOBOS, contra  
 los actos que reclaman del H. Congreso del Estado, -  
 Gobernador Constitucional del Estado y Recaudador de  
 Rentas del Estado consistentes en la expedición, pro  
 mulgación, aplicación y ejecución del mencionado De-  
 creto".

La sentencia se apoya en las siguientes -  
 consideraciones:

"Los conceptos de violación son infundados.  
 En efecto, el decreto impugnado adicionó los artícu-  
 los 2106 y 2079 del Código Administrativo del Estado,  
 para quedar como sigue: "2106.- Los ingresos ordina-  
 rios son aquellos que se obtienen normalmente para -  
 la atención del gasto público con este mismo carác--  
 ter se establece un impuesto adicional de 4% sobre -



todos los impuestos ordinarios y derechos a que se refiere este artículo, cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Artículo 2079.- A la Tesorería General del Estado ingresarán todos los caudales públicos pertenecientes al Estado, de acuerdo con lo establecido en este Código y su Reglamento. Los ingresos que le corresponda percibir a la Universidad de Chihuahua, de conformidad con lo establecido por el artículo 2106, serán recaudados por las Oficinas Receptoras, simultáneamente con el enterero de los impuestos ordinarios, cuyo rendimiento se concentrará directamente en la Tesorería General del Estado, -- quien lo entregará al Patronato de la Universidad de Chihuahua". De la simple lectura de los artículos -- transcritos se advierte que no es verdad lo que afirman los quejosos de que se establece un gravamen o retribución por la educación universitaria que imparte el Estado de Chihuahua, pues para poder coincidir en el evento que se menciona en los conceptos de violación, era necesario que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad a recibir enseñanza o que gravara de cualquier forma la instrucción universitaria, lo que no sucede, sino -- que el decreto, al adicionar el artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, establece un aumento del 4% en la tasa de los impuestos ordinarios, derechos y productos que percibe el Estado, para ser destinado al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Por lo que los preceptos impugnados no gravan la educación universitaria, sino que el impuesto re-





cae sobre todos los contribuyentes por las distintas actividades que desarrollan ya calificadas por el Estado y únicamente adiciona los impuestos que anteriormente pagaban con el 4% para destinarlo al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, que es un gasto público, como lo requiere la Constitución en su artículo 31 fracción IV, ya que es indudable que tiene este carácter la educación universitaria a cargo del Estado, de conformidad con lo que ordena el artículo 30. de la Constitución Federal. El anterior criterio se basa en la Tesis Jurisprudencial número-28 publicada en las páginas 75 a 79 de la Primera Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación editado en 1965. En estas condiciones el decreto reclamado no es violatorio de los artículos 30. fracción VII, 14 y 16 de la Constitución."

En cuanto al segundo concepto de violación, tampoco es fundado, ya que la expedición del decreto impugnado, fue hecha por el Congreso del Estado en uso de las facultades que le confieren los artículos 64 fracciones I y VI y 162 de la Constitución Política del Estado, que establece, respectivamente, que son atribuciones del Congreso del Estado, legislar en todo lo concerniente al régimen interior del Estado, expidiendo cuantas leyes y demás disposiciones necesarias para su gobierno y administración, en todos los ramos y que uno y otra comprenden, fijar anualmente todos los gastos de la Administración pública y expedir las disposiciones hacendarias que es

blezcan las contribuciones necesarias para los gastos públicos y no podrá variarlas o modificarlas en vista del presupuesto de egresos. El artículo 2106 del Código Administrativo del Estado establece que son ingresos ordinarios aquellos que se obtienen normalmente para la atención de los gastos públicos; como el sostenimiento de la Universidad tiene ese carácter, es evidente que la Legislatura local está facultada legalmente para fijar el impuesto adicional de referencia. Por lo anterior se estima que los actos que se reclaman de la Legislatura local no violan los preceptos citados ni las garantías individuales consagradas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal".

El tercer concepto de violación es igualmente infundado. Los quejosos sostienen que el decreto en estudio viola los principios de proporción y equidad -- porque "grava no percepciones, sino erogaciones, como son los impuestos gravados por el mismo decreto". No es verdad lo anterior porque el impuesto no grava los otros impuestos sino que únicamente aumenta la tasa de los previamente establecidos y como dicho aumento es del 4% para todos queda la misma proporción, pues los que pagaban cien pesos, pagarán ciento cuatro pesos y los que tenían impuestos por un mil pesos tendrán que pagar mil cuarenta pesos, o sea, que el aumento es proporcional y equitativo porque pone a todos los contribuyentes en la misma situación, por lo que no es violatorio del artículo 31 fracción IV de la Constitución Fede

- 11 -

REV. 7285/67.



ral . La Tesis de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que se cita no es aplicable en la especie porque no apoya los conceptos de violación ni está relacionada con la cuestión planteada."

"Respecto de los actos que se hacen consistir en la expedición, promulgación, refrendo, aplicación y ejecución del decreto, solamente cabe agregar - que no siendo inconstitucional el decreto por las consideraciones expuestas con anterioridad tampoco lo son dichos actos, porque no se impugnan por vicios propios, - sino que su inconstitucionalidad se hace depender del contenido del decreto".

"Como consecuencia de todo lo anterior se estima que los actos reclamados no son violatorios de los artículos 30, 14, 16 y 31 de la Constitución Federal por lo que corresponde negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan los quejosos".

QUINTO.- Inconformes los quejosos por conducto de su abogado interpusieron el recurso de revisión, mismo que les fué admitido por el Presidente de esta Suprema Corte con fecha veinte de septiembre de mil novecientos cuarenta y siete.

El Agente del Ministerio Público Federal designado para intervenir en este asunto pidió que se confirmase la sentencia recurrida.

#### CONSIDERANDO :

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para conocer del presente recurso de revisión por interponerse contra sentencia dictada en un juicio de amparo en el que se controvierte la constitucionalidad-

REV. 7285/67.

de una ley. Fracción IV bis inciso a) del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 84.ª fracción I inciso a) de la Ley de Amparo.

SEGUNDO.- En el escrito de revisión se expresan los siguientes agravios:

"1o.- El Juez "a quo", en el Cuarto Considerando de la sentencia recurrida, dice a la letra:

"Los anteriores conceptos de violación, son infundados. En efecto, el decreto impugnado adiciona los artículos 2106 y 2079 del Código Administrativo en el Estado, para quedar como sigue:- "2106.- Los ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen normalmente para la atención del gasto público.- Con este mismo carácter se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos a que se refiere este Artículo, cuyo rendimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Artículo 2079.- A la Tesorería General del Estado ingresarán todos los caudales públicos pertenecientes al Estado, de acuerdo con lo establecido en este Código y su Reglamento.- Los ingresos que le corresponda percibir a la Universidad de Chihuahua, de conformidad con lo establecido por el Artículo 2106, serán recaudados por las Oficinas Receptoras, simultáneamente con el entero de los impuestos ordinarios, cuyo rendimiento se concentrará directamente en la Tesorería General del Estado, quien lo entregará al Patronato de la Universidad de Chihuahua". De la simple lectura de los Artículos transcritos, se advierte que no es verdad lo que afirman los que



REV. 7285/67.

josos de que se establece un gravamen o retribución por la educación universitaria que impartió el Estado de Chihuahua, pues para poder coincidir con el evento que se menciona en los conceptos de violación, era necesario - que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad a recibir la enseñanza o que gravara de cualquier forma la instrucción universitaria, - lo que no sucede, sino que el decreto, al adicionar el Artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, establece un aumento del 4% en la tasa de los impuestos ordinarios derechos y productos que percibe el Estado, para ser destinado al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua. Por lo que los preceptos impugnados no -- gravan la educación universitaria, sino que el impuesto recae sobre todos los contribuyentes por las distintas actividades que desarrollan ya calificadas por el Estado y únicamente adiciona los impuestos que anteriormente pagaban, con el 4% para destinarlo al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, que es un gasto público, como lo requiere la Constitución en su artículo 31 fracción IV, ya que es indudable que tiene ese carácter la educación universitaria a cargo del Estado, de conformidad con lo que ordena el Artículo 30. de la Constitución Federal. El anterior criterio se basa en la Tesis Jurisprudencial número 28 publicada en las páginas 75 a 79 - de la primera parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, editado en 1965. En estas condiciones el Decreto reclamado no es violatorio de los Artículos- 30. Fracción VII, 14 y 16 de la Constitución".



REV. 7285/67.

"Las anteriores consideraciones del "a quo", son incongruentes y contradictorias puesto que, sin que aparezca del Decreto impugnado ni una sombra siquiera de que el 4% que grava TODOS LOS INGRESOS ORDINARIOS Y para destinarlo UNICA Y EXCLUSIVAMENTE al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua, sea un aumento de tasa, la sentencia recurrida así lo declara enfáticamente y afirma que ese aumento de tasa, como piadosamente lo denomina, no grava la instrucción universitaria, puesto que, para que tal cosa ocurriera, sería necesario que el tributo recayera sobre las personas que concurren a la Universidad a recibir la instrucción universitaria.- Este argumento nos llevaría a la conclusión de que en los colegios de paga, la instrucción resulta gratuita, debido a que, como los alumnos, por su natural dependencia económica, no hacen los pagos de sus colegiaturas, la instrucción que reciben no es a título oneroso".

"Como queda demostrado, el impuesto impugnado ha sido creado con el exclusivo fin de sostener a la Universidad de Chihuahua, en su misión educadora, con detrimento de los causantes de dicho impuesto y en contravención del Artículo 3o. Constitucional que establece categóricamente que la instrucción que imparta el Estado debe ser gratuita. Por tanto éste debe ajustarse a sostener a la Universidad en la forma y términos que la Ley de Egresos del Estado en su Partida 217 fracciones IV y V señala, que destina para la Universidad la suma de \$4.630.000.00, sin que dicha partida pueda modificarse, sino con cargo a los gastos públicos y de acuerdo -





con el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria del Artículo 3o. Constitucional. Tal disposición legal establece, entre otras condiciones, la capacidad del presupuesto y no faculta al Estado para fijar impuesto alguno para el sostenimiento específico de los centros educativos superiores; en consecuencia, el Juez a quo, al no tomar en consideración lo establecido por el precepto Constitucional invocado, viola en agravio de los quejosos el principio de legalidad garantizado por los Artículos 14 y 16 Constitucionales".

"II.- La sentencia recurrida establece que el segundo concepto de violación es infundado, pretendiendo que la expedición del Decreto impugnado fue expedido por el Congreso del Estado en uso de las facultades que le confieren los artículos 64 fracciones I y VI y 162 de la Constitución Política del Estado. Tal apreciación es inexacta, porque si bien es cierto que la fracción I del Artículo 64 da facultades al Congreso para legislar en todo lo concerniente al régimen interior del Estado, expidiendo cuantas leyes y demás disposiciones sean necesarias para su Gobierno y administración, también es cierto que la fracción VI del mismo Artículo, sólo faculta al Congreso para fijar anualmente todas las bases para la administración pública del Estado PREVIO EXAMEN DEL PRESUPUESTO que presente el Ejecutivo; el Artículo 162 invocado por el a quo, faculta al Congreso para expedir las disposiciones hacendarias que establezcan las contribuciones necesarias para los gastos públicos, en VISTA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, el cual no está facultado para modificar; además deberá sujetar

se a lo establecido por el Artículo 163 que establece que el año fiscal para el Estado y los Municipios se contará del 1.º de enero al 31 de diciembre de cada año. Por tanto las facultades del Congreso son limitadas, máxime cuando no fundó ni motivó el Decreto impugnado y establece un impuesto exclusivo, esto es: privativo, prohibido por la Constitución Política del Estado, como se ha demostrado anteriormente al establecer las -- restricciones establecidas en el artículo 162 de la -- misma, por la Constitución Federal, como se comprueba plenamente con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia-definida:"

"De acuerdo con el artículo 31 fracción IV de la Carta Magna, para la validez constitucional de un impuesto, se requiere la satisfacción de tres requisitos fundamentales: primero, que sea proporcional; segundo, que sea equitativo, y tercero que se destine al pago de los gastos públicos. Si falta alguno de estos tres requisitos, necesariamente el impuesto será contrario a lo estatuido por la Constitución, ya que ésta no concedió una facultad omnimoda para establecer las exacciones que, a juicio del Estado, fueran convenientes, sino una facultad limitada por esos requisitos".

"Tomo LXV.- Arrigunaga Peón Manuel de Pág. 2723. Tomo LXIX.- Cabezut Alberto M. y Coags.- Pág. 398. Tomo LXIX, Cabezut M. y Coags. Pág. 5432.- Tomo LXXXIII, Bolaños García Fulgencio, Pág. 813.- Tomo LXXV, Mora Manuel F., Pág. 3603.- (Copilación del Semanario Judi-



REV. 7285/67.

cial de la Federación, Tomo LXX, Pág. 1000)".

"Por tanto, al dar interpretación indebida a las disposiciones constitucionales que se han citado y al no acatar la jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia, el Juez sentenciador falta a los más elementales principios de legalidad violándolos en nuestro agravio y en contravención de los Artículos 14 y 16 Constitucionales".

"III.- El Decreto impugnado de inconstitucionalidad, expresa con toda claridad y precisión: "Se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos." No cabe, en consecuencia, ninguna interpretación gramatical ni lógica que no sea la que se expresa literalmente".

"Mucho menos cabe la interpretación arbitraria que pretende darle el Juez "a quo", en el sentido de que se trata de un aumento de tasa sobre los impuestos. Por tanto el decreto viola los más elementales principios de tributación y jamás se ha dado el caso de que las erogaciones, como son los impuestos gravados, sean motivo de tributación".

"Así pues, queda claro que el Decreto de que se trata, grava erogaciones y no percepciones, por lo que es a todas luces ilegal, injusto y monstruoso."

"Por tanto viola los principios de justicia y legalidad consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales; y el Juez al no tomar en consideración las razones y fundamentos en que basamos nuestra demanda de amparo, viola en nuestro agravio dichas garantías constitucionales".

TERCERO.- Debe declararse firme el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida, por no existir agravios al respecto.

*Jefe de grupo*  
*✓✓*  
CUARTO.- Es infundado el primero de los agravios que los recurrentes hacen valer. En este agravio se sostiene substancialmente, en su primera parte, que las consideraciones del Juez de Distrito son incongruentes y -- contradictorias, porque sin que aparezca en el decreto -- que se reclama que el impuesto adicional sea un aumento -- en la tasa de los impuestos ya establecidos, el juzgador lo declara enfáticamente en su sentencia, afirmando además que no grava la instrucción universitaria, cuando es -- está plenamente demostrado que el tributo en cuestión está destinado al sostenimiento de la Universidad en su misión educadora y que por tal motivo se controviene el artículo 3o. de la Constitución Federal en que se dispone que la educación que imparta el Estado será gratuita.

No existe la contradicción que se atribuye al -- Juez de Distrito en los argumentos que fundan lo que aparece como primer considerando de su sentencia. Los quejosos en el primer concepto de violación que hacen valer -- en su demanda, sostienen en esencia que el decreto que -- impugnan es violatorio de la fracción VII del artículo -- 3o. de la Constitución Federal que establece que la educación que imparta el Estado será gratuita; que por lo -- tanto, no pueden establecerse impuestos como el que se -- reclama, destinados al sostenimiento de la Universidad -- del Estado de Chihuahua, sin violar dicho precepto Constitucional. El Juez a quo, al analizar este concepto de violación, lo estima infundado, considerando que conforme al artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, que crea el impuesto de 4%, no se está gravando en forma alguna la instrucción universitaria, pues el tributo no recae sobre los que acuden a la universidad para recibir instrucción, sino sobre todos los contribuyentes por las





REV. 7285/67.

- distintas actividades que realicen, ya calificadas por el Estado y a quienes se les adicionen los impuestos que ya pagaban con el de nueva creación para el sostenimiento de la universidad, que es un gasto público al que debe contribuir el particular. En la consideración que se resume, no puede haber ni hay contradicción porque, en efecto, el impuesto que se combate no es un impuesto por recibir educación; consecuentemente, no se contraviene el mandato constitucional de que la educación se imparta en forma gratuita por el Estado. El precepto que lo establece lo considera, según los términos del artículo 2106 del Código Administrativo del Estado, como un ingreso ordinario que se destina a la atención del gasto público, y lo adiciona a los impuestos ordinarios y derechos con que tributan los diversos causantes en las actividades que, como dice el Jefe de Distrito, ya fueron calificadas por la Hacienda Local. Se trata de una contribución al gasto público que va a satisfacer las necesidades de la colectividad para un fin específico como es la educación que el Estado otorga a la juventud, para el desarrollo cultural, social y económico de la propia entidad y, por ende, de la Nación Mexicana.

Ahora bien, si se trata de un gasto público que debe satisfacerse con la contribución de todos los habitantes de Chihuahua, el hecho de que el Estado fije en una ley un tributo, para sostener dicho gasto público, no implica, por la circunstancia de que se precise cualva a ser el destino de ese tributo, que se está cobrando la educación, y en este caso resulta acertada la consideración del Jefe de Distrito que, para que tal cosa sucediera, se requeriría que ese tributo recayera sobre el -

- educando, ya que entonces sí se haría nugatorio el mandato constitucional de impartir gratuitamente la enseñanza.

En su segunda parte el agravio se refiere a que el Estado debe sujetarse a la partida 217, fracción IV y V de la Ley de Egresos del propio Estado, que destina para la Universidad \$ 4,630,000.00 anuales, sin que dicha partida pueda modificarse sino con cargo a los gastos públicos y de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, reglamentaria del artículo 3o. Constitucional. Que esta disposición legal no faculta al Estado para fijar impuesto alguno para el sostenimiento específico de los centros educativos superiores. Como se ve en esta segunda parte del agravio se vuelve a impugnar el decreto número 293 por las mismas causas ya invocadas, o sea la pretendida oposición a los mandatos del artículo 3o. Constitucional y se recurre a un concepto de ilegalidad al citar el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, sin parar mientes en que, según lo dispuesto en el artículo 2o. de la propia Ley, este Ordenamiento no se aplica a las universidades dependientes de las entidades federativas, amén de que el citado artículo 23 no prohíbe la existencia de un impuesto adicional como el mencionado. El carácter de exclusividad del referido impuesto adicional del 4% sólo se menciona como un calificativo al mismo, sin que sea propiamente objeto del agravio.

Por lo demás, la ley que se combate en este amparo, adiciona, en efecto, los impuestos en general cuyas bases y tarifas están determinadas por las leyes en particular y las aumenta en un 4% sin que haya precepto





REV. 7285/67.

constitucional que se lo impida, porque frente a la obligación del particular de contribuir al gasto público, está la facultad del Estado de imponer las contribuciones necesarias para satisfacer los gastos públicos y si como se dejó establecido, el impuesto adicional no tiene el carácter de un impuesto a la educación porque no grava sobre los educandos, es evidente que el Estado, frente a las necesidades y fines que constituyen su esencia puede establecer un impuesto para destinarlo a un gasto público especial.

En consecuencia, la sentencia del Juez de Distrito se ajusta a la realidad tributaria y a los principios constitucionales que en el caso no se contravienen.

QUINTO.- El segundo agravio también resulta infundado por las siguientes razones.

Los recurrentes afirman que es inexacta la apreciación hecha por el Juez de Distrito, al declarar infundado el segundo concepto de violación, al considerar en su sentencia que el "Congreso del Estado expidió el Decreto que se impugna en uso de las facultades que le confieren los artículos 64 fracciones I y VI y 162 de la Constitución Política del Estado"; alegando dichos recurrentes, que si bien es cierto que el referido artículo 64 faculta al Congreso para legislar en todo lo concerniente al régimen interior del Estado; también lo es que la fracción VI del propio artículo solo lo faculta para fijar anualmente las bases para la administración pública, previo examen del presupuesto que presente el Ejecutivo; por lo que consideran los recurrentes que con ello se viola el mencionado artículo 162 y en consecuencia los artículos 14 y 16 de la Constitución -

REV. 7285/67.

- Federal, pero sin señalar en que consisten dichas violaciones al Pacto Federal.

El agravio es infundado ya que sus argumentos no son operantes para modificar las consideraciones del juzgador, en virtud de que los recurrentes confunden en sus alegaciones el acto de expedir leyes fiscales, (o de cualquier otra índole), que se estimen necesarias para el régimen interior del Estado, con la facultad de aprobar el presupuesto de egresos; facultad que no puede constituir un obstáculo para que el Congreso legisle expida las leyes que considere necesarias; no quedando por lo tanto limitada su facultad legislativa, ni debiendo entremezclarse o confundirse un acto con otro.

Por lo anterior el Juez de Distrito obró correctamente al considerar en su sentencia que no existen violaciones a la Constitución Local, pues como quedó demostrado el Congreso del Estado de Chihuahua tiene facultades para legislar en todo lo que concierne al régimen interior del Estado, con la salvedad de aquellas materias reservadas por la Constitución Federal para el Congreso de la Unión, no comprendiéndose en estas las referidas a impuestos para fines educativos, ni la modificación de los presupuestos de egresos estatales.

De acuerdo con dicha facultad la Legislatura del Estado expidió el Decreto que se reclama, mismo que como se demostró no es violatorio de los artículos 30., 14 y 16 de la Carta Fundamental, y si la creación de ese impuesto modifica el Presupuesto de Egresos expedido para el año de 1966, tal modificación no convierte a la Ley en inconstitucional, toda vez que fué expedida por el órgano constitucionalmente autorizado. Podrá ser



- 23 -

REV. 7285/67.

- antitécnico que se modifique el Presupuesto durante -  
 el año de 1966; pero no es inconstitucional, ya que no-  
 se puede sostener validamente como pretenden hacerlo --  
 los recurrentes, que la aprobación del Presupuesto de -  
 Egresos para un año determinado sea un impedimento para  
 que el Congreso legisle en materia de impuestos. Tal --  
 presupuesto de Egresos no puede tener, en materia de --  
 gastos, la rigidez que se pretende en el agravio que se  
 estudia, pues siendo los fines del Estado resolver to--  
 dos los problemas que afectan a la administración públi  
 ca y a la colectividad no se le puede limitar para que-  
 por conducto del órgano respectivo dicte todas las medi  
 das que sean necesarias para el cumplimiento de esos --  
 fines.

El agravio, en segunda parte, también es in-  
 fundado, en cuanto sostienen los recurrentes que el im-  
 puesto es desproporcionado o inequitativo y que por tal  
 motivo viola el artículo 31 fracción IV de la Constitu-  
 ción Federal.

En el caso a estudio la capacidad contributiva-  
 de los causantes quejosos está en relación con la de --  
 los demás causantes, lo cual se aprecia de la lectura -  
 de la ley reclamada; existiendo una perfecta distribu-  
 ción de la carga fiscal entre todos los causantes que-  
 se encuentran en los mismos presupuestos de la norma en  
 estudio; ya que la aplicación a todos los causantes con-  
 una tasa igual del 4% en relación a los impuestos que -  
 proporcionalmente ya les han sido fijados por otros ---  
 conceptos, lo que demuestra que no tiene las caracterís-  
 ticas de inconstitucionalidad que se le pretende impu-  
 tar. En cuanto a que se considere como privativo por --  
 dedicarse a un fin especial como es el sostenimiento de

- la Universidad del Estado, debe decirse que aplicando la tesis jurisprudencial número 17 del último Apéndice de jurisprudencia, no tiene tal carácter de ~~la~~ Ley privativa. La tesis de referencia sostiene lo siguiente:-- "LEYES PRIVATIVAS.- Es carácter constante de las leyes que sean de aplicación general y abstracta, (es decir, que deben contener una disposición que no desaparezca después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a ésta aplicación y se aplique sin consideración de especie o de personas a todos los casos idénticos al que previenen, en tanto no sean abrogadas). Una Ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad, garantizado por el artículo 13 Constitucional, y aún deja de ser una -- disposición legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Estas Leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, -- pues el carácter de generalidad se refiere a las leyes de todas las especies, y en contra de la aplicación de las leyes privativas protege el ya expresado artículo 13 constitucional."

El Decreto impugnado, reúne estos requisitos, -- de generalidad e igualdad, como puede constatarse de su sola lectura:

"Artículo 2106.- Los ingresos ordinarios son -- aquellos, que se obtienen normalmente para la atención del gasto público."

Con este mismo carácter se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos a que se refiere este artículo cuyo ren





REV. 7285/67.

- dimiento será destinado única y exclusivamente al sostenimiento de la Universidad de Chihuahua."

De la transcripción anterior se observa que el artículo en cuestión no carece de abstracción y generalidad, no pudiendo por tanto considerarse que tenga el carácter de privativo.

SEXTO.- En el tercer agravio sostienen los recurrentes que en la redacción del decreto impugnado en la parte que dice: "se establece un impuesto adicional del 4% sobre todos los impuestos ordinarios y derechos...." no cabe ninguna interpretación gramatical ni lógica que no sea la que se expresa literalmente pues sostienen que el impuesto se fija sobre otros impuestos. El agravio es infundado puesto que, como acertadamente lo hace notar el Juez de Distrito, con el decreto impugnado no se gravan otros impuestos, ya que si así fuera quien debería pagarlos sería el Estado, sin que sufrieran perjuicio alguno los recurrentes. Las leyes deben interpretarse fundadamente según su espíritu y no apegarse a la letra pues si de la simple lectura del artículo 2106, transcrito en el considerando quinto de esta ej.atoria, pudiera suponerse que se gravan otros impuestos, con una interpretación armonica de los dos párrafos del citado artículo y con un simple razonamiento de sentido común, se desprende que se trata de un ingreso ordinario que se establece como impuesto adicional, o sea que no se gravan los otros impuestos, sino que los mismos se adicionan en un 4%, consistiendo por tanto en un aumento simple a los pre-existentes y de ninguna manera en un impuesto sobre todos los demás impuestos, por lo que el hecho generador del crédito fiscal es el mismo ya establecido en cada uno de los impuestos

- tos anteriores, adicionando únicamente con el 4%.

SEPTIMO.- Conviene insistir en que solo por lo que ve al carácter que atribuyen los recurrentes en su primer agravio al impuesto de ser contrario al artículo 30. Constitucional se alega en el aspecto exclusivo que contiene al destinarlo expresamente para el sostenimiento de la Universidad de Chihuahua.

Doctrinalmente es sabido que según el fin del impuesto, se pueden presentar tres casos: el primero en que el impuesto solo tiene fines fiscales y se destina a cubrir los gastos generales del Estado.

El segundo en que el impuesto tiene un fin fiscal, pero se aplica a ciertos gastos especiales, que es lo que ocurre en el presente caso y, por último, en el tercero en que el impuesto tiene fines extra-fiscales.

El artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Fundamental establece: "Son obligaciones de los mexicanos: IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

Ahora bien, esa obligación tiene por objeto la satisfacción de los gastos públicos que el Estado debe cubrir en beneficio de la colectividad. Que con los impuestos deban cubrirse los gastos públicos no constituye una prohibición, para que el tributo, por la ley del Congreso, se destine desde su origen a cubrir un gasto especial, si es en beneficio de la colectividad y a ello está obligado el Estado. Si alguna prohibición contiene el precepto, no es otra que la de que el impuesto se destine a fines diferentes a los del gasto público,-





- 27 -

REV. 7285/67.

- pero en el caso se destinó al sostenimiento de la Uni  
versidad del Estado, que en un gasto público. /

En consecuencia es correcta la consideración --  
que al respecto hace el Juez de Distrito en su senten--  
cia al referirse a la fracción IV del artículo 31 Cons--  
titucional, ya que mientras el impuesto se destine a un  
gasto público, se estará cumpliendo con el mandato cons--  
titucional de aplicar el impuesto a gastos de beneficio  
de la colectividad. >> *halla aquí. Regimen de...*

Este criterio fue sustentado en el amparo en --  
revisión 4431/56, promovido por la Sección de Técnicos--  
y Manuales del Sindicato de Trabajadores de la Produc--  
ción Cinematográfica de la República, fallado el dieci--  
séis de abril de mil novecientos setenta, por unanimi--  
dad de diecisiete votos de los Ministros: Alberto Oroz--  
co Romero, Carlos del Río Rodríguez, Mario G. Rebolledo,  
Alberto Jiménez Castro, Manuel RIVERA SILVA, Ezequiel --  
Burguete Farrera, Abel Huitrón y A., Rafael Rojina Vi--  
llegas, Enrique Martínez Ulloa, Jorge Iñárritu, Ernesto  
Solís López, Ramón Canedo Aldrete, María Cristina Sal--  
morán de Mayo, Manuel Yáñez Ruíz, Mariano Ramírez Váz--  
quez, Pedro Guerrero Martínez y Presidente Alfonso Guz--  
mán Nebra.

Como un precedente que es muy importante seña--  
lar, debe citarse lo resuelto por ese H. Pleno de la Su--  
prema Corte de Justicia de la Nación en el amparo ----  
7284/67 en la sesión del 12 de enero de 1971 por unani--  
midad de votos de los señores Ministros: Eusebio Gue--  
rrero, Carlos del Río Rodríguez, Mario G. Rebolledo, --  
Alberto Jiménez Castro, Manuel RIVERA SILVA, Ezequiel -  
Burguete Farrera, Abel Huitrón y Aguado, Rafael Rojina--  
Villegas. Jorge Saracho Alvarez, Enrique Martínez Ulloa,

- Jorge Iñárritu, Ramón Canedo Aldrete, María Cristina-Salmerán de Tamayo, Manuel Yáñez Ruiz, Pedro Guerrero -  
Martínez, Salvador Mondragón Guerra, Ernesto Aguilar --  
Alvarez y Presidente Alfonso Guzmán Neyra, pues en tal-  
juicio de amparo: la demanda, la sentencia del Juez y -  
el escrito de expresión de agravios son IDENTICOS con -  
el cambio natural de nombres de los quejosos y fecha, -  
habiéndose negado el amparo y protección de la Justicia  
Federal a los quejosos.

Por lo expuesto y con fundamento además, en los  
artículos 163 fracción I, 107, fracciones VIII inciso -  
a) de la Constitución Federal; 84 fracción I inciso a)-  
y 91 de la Ley Orgánica, se resuelve:

Vo. Bo.

Cotejado,

PRIMERO.- Se declara firme el sobreseimiento --  
respecto al acto reclamado del Tesorero General del Es-  
tado de Chihuahua consistente en el refrendo del decreto  
293, expedido por el Congreso del Estado.

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia en la parte-  
que se revisa.

TERCERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni-  
protege a Oscar Hernández A., y coagraviados contra los  
actos del Congreso del Estado de Chihuahua, Gobernador-  
de la misma entidad y Recaudador de rentas del Estado,-  
consistentes en la expedición, promulgación, aplicación  
y ejecución del decreto mencionado en el punto anterior.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución-  
vuelvan los autos al Juzgado de su origen; y en su oportu-  
nidad archívese el toca.

FMR/rmg..

REV. 7285/67.



Así, lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de dieciséis votos de los señores Ministros Guerrero López, Rebolledo, Jiménez Castro, Burguete, Saracho Alvarez, Iñárritu, Azuela, Solís López, Canedo, Salmorán de Tamayo, Yáñez, Ramírez -- Vázquez, Guerrero Martínez, Mondragón Guerra, Aguilar Alvarés y Presidente Guzmán Neyra.- Fue ponente el C. Mtro. Guerrero López.- Firman los CC. Presidente y Ministros - que intervinieron con el C. Secretario General de Acuerdos que da fe.

PRESIDENTE

ALFONSO GUZMAN NEYRA

EUQUERIO GUERRERO LOPEZ

MARIO G. REBOLLEDO

ALBERTO JIMENEZ CASTRO

EZEQUIEL BURGUETE FARRERA

JORGE SARACHO ALVAREZ

JORGE INARRITU

MARIANO AZUELA

ERNESTO SOLIS LOPEZ

RAMON CANEDO ALDRETE

MA. CRISTINA SALMORAN DE T.

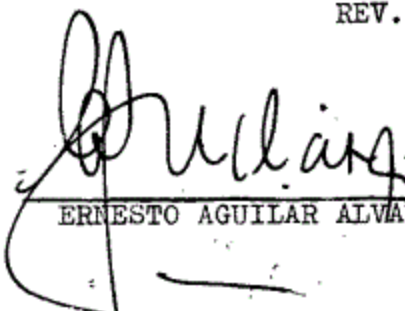
MANUEL YANEZ RUIZ

MARIANO RAMIREZ VAZQUEZ

PEDRO GUERRERO MARTINEZ

SALVADOR MONDRAGON GUERRA

REV. 7285/67/1a.

  
ERNESTO AGUILAR ALVAREZ,

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.

  
RAUL CUEVAS MANTECON.

  
En ..... por lista de .....  
se notificó la resolución anterior a los interesados y al Ministerio Público Federal.

- 5 JUN. 1972

En ..... por lista de la misma fecha,  
se notificó la resolución anterior a los interesados y al Ministerio Público Federal.





ASUNTO:- Se remite testimonio de la resolución dictada en el toca **7285/67** así como los autos del juicio de amparo promovido por **Oscar Hernández A. y Coagravados.**

**PRIMERA**

AL C.

**7138**  
Toca # **7285/67**

JUEZ **PRIMERO** DE DISTRITO.  
**CHIHUAHUA, CHIH.**

Amp. # **233/67**

En **82** fojas útiles, devuélvase a Ud. los autos del juicio de amparo promovido por **Oscar Hernández A. y Coagravados,**

**"AÑO DE JUAREZ"**

contra actos de **1 Congreso de ese Estado,**

CON **6 ANEXOS.** remitiéndole a la vez en **28** fojas también útiles  
**1 testimonio.** un testimonio de la resolución dictada por el Tribunal-  
**1 cuaderno.** Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, -  
**4 copias.** en el Toca respectivo que fué tramitado por la Sección-  
Primera de Trámite con el número **7285/67.**

Sírvase Ud., acusar recibo y mandar hacer las--  
notificaciones legales con **4** copias que se acompa--  
ñan, de acuerdo con lo que dispone la fracción I del --  
artículo 29 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que, -  
en su caso, se cumpla con lo que disponen los artículos  
104 y 105 del mismo Ordenamiento.

Le reitero mi atenta consideración.

México, D.F., a **13 de septiembre de 1972.**

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS,

RAUL CUEVAS MANTECON.

JGT/mm.v.







42

12